

Coyhaique, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Que el día diecinueve de agosto del presente año, ante la sala única de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, se dio inicio a la audiencia del juicio oral, seguida contra **CLAUDIA ANDREA SALDIVIA VIDAL**, chilena, RUN N° 14.097.900-7, soltera, comerciante, natural de Puerto Aysén, nacida el 7 de mayo de 1981, de 42 años, comerciante, domiciliada en sector Río Claro, parcela 8-A, de esta ciudad, representada por los defensores privados Jorge Arriagada Garrido y Fernando Esteban Morales González y **JOSÉ MANUEL OVANDO PÉREZ**, chileno, RUN N° 9.059.512-1, nacido el día 1 de octubre de 1962, chileno, natural de comodoro Rivadavia, de 61 años de edad, comerciante, domiciliado en sector Río Claro, parcela 8-A, de esta comuna, asistido legalmente por su abogado privado Rodrigo Eduardo Oyarzun Ramírez.

Sostuvo la acción penal el Ministerio Público a través del fiscal Luis Humberto Contreras Alfaro asistido por el abogado asesor de la fiscalía Miguel Riquelme Cortés. En tanto el querellante Servicio de Impuestos Internos (SII), lo hace mediante los abogados Tomás Francisco Goldsack Merino y Carlos Seguel Medina, del Departamento Jurídico de la XI Dirección Regional Coyhaique del Servicio de Impuestos Internos, todos los intervinientes con domicilio y forma de notificación registrados en el Tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acusación. La imputación efectuada por el Ministerio y la querellante, según auto de apertura de fecha ocho de febrero de dos mil veinticuatro, dictado por el Tribunal de Garantía de esta ciudad, es del siguiente tenor:

“Doña Claudia Andrea Saldivia Vidal es contribuyente de primera categoría, empresaria individual, cuyo administrador de negocios por mandato general y representante legal es el Sr. José Manuel Ovando Pérez. Es así como, en la ciudad de Coyhaique, entre los meses de julio a agosto de 2017, los



imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon la factura electrónica 37 de fecha 28-07- 2017 del proveedor Assistance Group SPA RUT 76.725.632-9, en circunstancias que los servicios de transporte de los que da cuenta la factura, en realidad nunca fueron prestados por dicho proveedor. Por lo antedicho, la factura detallada resulta ser falsa respecto a la operación de la que da cuenta.

Además de lo anterior, los imputados registraron y declararon la referida factura 37 en los periodos de julio y agosto de 2017, por lo que utilizaron indebidamente en dos ocasiones el crédito fiscal IVA de la factura falsa.

A su vez, en el año 2018, los imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon las facturas N° 111 de fecha 05-01-18; 116 de fecha 12-01-2018; 124 de fecha 19-01-2018; 242 de fecha 26-01-2018; 340 de fecha 03-02-2018; 345 de fecha 10-02-2018; 353 de 17-02-18; 385 de fecha 24-02-18; 613 de 03-03-18; 619 de 10-03-18; 626 de 17-03-18 y 775 de fecha 31-03-2018, todas del proveedor La Minga SPA RUT 76.390.048-7, en circunstancias que los servicios de transporte de los que dan cuenta las facturas, en realidad nunca fueron prestados por dicho proveedor, por lo cual las facturas detalladas resultan ser falsas respecto a la operación de la que dan cuenta.

A su turno, en el año 2018 los imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon las facturas 136 de 04- 08-2017; 145 de 11-08-2017; 187 de 18-08-2017; 200 de 25-08-2017; 257 de 02-09-2017; 276 de 09-09-2017; 291 de 16-09-2017; 301 de 23-09-2017; 394 de 30-09-2017; 492 de 06-10-2017; 500 de 13-10-2017; 532 de 20-10-2017; 543 de 27-10-2017; 768 de 03-11-2017; 776 de 10-11-2017; 784 de 17-11- 2017; 853 de 24-11-2017; 860 de 30-11-2017; 964 de 02-12-2017; 970 de 09-12-2017; 975 de 16-12-2017; 1009 de 23-12-2017 y 1131 de 29-12-2017, todas del proveedor Group Ingenierías Lavín SPA RUT 76.333.986-6 en circunstancias que los servicios de transporte de los que dan cuenta las facturas en realidad nunca fueron prestados por dicho proveedor, por lo cual las facturas detalladas resultan ser falsas respecto a la operación de la que dan cuenta.



Adicionalmente, en el año 2016 los imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon la factura 443 de 26-12-2016 de la empresa Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada RUT 76.460.834-8, en circunstancias que los servicios de transporte de los que da cuenta la factura en realidad nunca fueron prestados por dicha empresa, por lo cual las facturas detalladas resultan ser falsas respecto a la operación de la que dan cuenta.

Por su parte, en el año 2017 los imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon las facturas 749 de 28-04-2017; 730 de 21-04-2017; 723 de 14-04-2017; 708 de 07-04-2017; 924 de 06-05-2017; 936 de 27-05-2017; 943 de 31-05-2017; 927 de 13-05-2017; 932 de 20-05-2017, todas del proveedor Servicios Integrales ASIMEC RUT 76.641.266-1 en circunstancias que los servicios de transporte de los que dan cuenta las facturas en realidad nunca fueron prestados por dicho proveedor, por lo cual las facturas detalladas resultan ser falsas respecto a la operación de la que dan cuenta.

En el año 2017 los imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon las facturas 451 de 30-06-2017; 445 de 23-06-2017; 439 de 09-06-2017; 434 de 09-06-2017; 608 de 07-07-2017; 613 de 14-07-2017; y 621 de 21-07-2017 del proveedor Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada RUT 76.375.671-8 en circunstancias que los servicios de transporte de los que dan cuenta las facturas en realidad nunca fueron prestados por esa empresa, por lo cual las facturas detalladas resultan ser falsas respecto a la operación de la que dan cuenta.

A su vez, en el año 2015 los imputados, en el formulario 29 sobre declaración mensual y pago de impuestos, registraron y declararon las facturas 13195 de 01-12-2015; 13194 de 03-12-2015; 13210 de 07-12-2015; 13203 de 07-12-2015; 13212 de 07-12-2015; 13205 de 07-12-2015; 13216 de 10-12-2015; 13202 de 05-12-2015; 13220 de 10-12-2015; 13206 de 07-12-2015; 13211 de 07-12-2015; 13218 de 10-12-2015; 13207 de 07-12-2015 y 13209 de 07-12-2015, todas del proveedor Distribuidora Comercial Carsal Limitada RUT



76.438.661-2, en circunstancias que la imputada Claudia Saldivia Vidal es dueña del 70% de la sociedad referida, la cual ha declarado SIN MOVIMIENTOS desde el periodo de enero de 2016; ocurriendo que dicha sociedad emitió un documento por el cual reconoce adeudar a doña Claudia Saldivia la suma de \$144.340.360; mientras que dicha sociedad Carsal ha declarado en el periodo diciembre de 2015, un débito fiscal IVA inferior al que realmente tiene. Todo lo cual permitió a los imputados aumentar indebidamente el crédito fiscal IVA que tenían derecho a hacer valer en relación al débito fiscal IVA que debían enterar en arcas fiscales.

Además de lo anterior, los imputados utilizaron los montos netos de todas las facturas referidas anteriormente para incrementar los costos de la contribuyente Claudia Saldivia Vidal, disminuyendo la base imponible del impuesto de primera categoría y en consecuencia el monto de impuesto declarado en el formulario 22 sobre declaración anual de impuesto a la renta en los años 2016, 2017 y 2018.

Todo lo anterior generó un perjuicio fiscal de a lo menos:

\$ 47.801.256,00.- (Cuarenta y siete millones ochocientos un mil doscientos cincuenta y seis pesos) por impuesto IVA.

\$ 51.056.750,00.- (Cincuenta y un millones cincuenta y seis mil setecientos cincuenta pesos) por impuesto a la renta.”(sic).

En concepto del ente persecutor, los hechos descritos “configuran un concurso real o material por reiteración de los delitos, en grado de desarrollo consumados, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 incisos primero y segundo, por declaración maliciosamente incompleta o falsa, y uso de facturas o documentos falsos que puedan inducir a liquidaciones de impuesto inferiores a las que correspondan u ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas, o a burlar un impuesto”(sic).

Atribuyéndoles a la acusada y acusado participación en ellos en calidad de autores ejecutores directos en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.



Respecto de los acusados concurre la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, en los términos del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

Finalmente el Ministerio Público solicita que se aplique a los acusados Claudia Andrea Saldivia Vidal y José Manuel Ovando Pérez, la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en grado mínimo a cada uno de los acusados. b.- La pena del cien por ciento (100%) de los impuestos impagos: que corresponden a \$ 47.801.256,00.- (Cuarenta y siete millones ochocientos un mil doscientos cincuenta y seis pesos) por impuesto IVA, y \$ 51.056.750,00.- (Cincuenta y un millones cincuenta y seis mil setecientos cincuenta pesos) por impuesto a la renta. c.- Las penas accesorias de los artículos 27 y siguientes del Código Penal y el pago de las costas de la causa.

B.- Acusación del Querellante.

Por su parte el acusador particular representado por Sergio Caro Flores, abogado querellante y Jefe del Departamento Jurídico de la XI Dirección Regional Coyhaique del Servicio de Impuestos Internos, presentó acusación particular, en contra de **Claudia Andrea Saldivia Vidal y José Manuel Ovando Pérez**, ya individualizados en, en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación:

“Durante los períodos comerciales correspondientes a los meses de diciembre de 2015; julio, agosto y diciembre de 2016; abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y; enero, febrero y marzo de 2018, los acusados aumentaron indebidamente el Crédito Fiscal IVA que Claudia Andrea Saldivia Vidal, como contribuyente de Primera Categoría, tenía derecho a hacer valer, en relación a las cantidades de Débito Fiscal IVA que debía enterar en arcas fiscales, y declararon en los respectivos Formularios N° 29, sobre Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos, un Crédito Fiscal IVA mayor al que realmente había obtenido en los períodos comerciales señalados, amparándose en el registro y contabilización de 67 facturas falsas, emitidas por 7 supuestos proveedores, representativas de operaciones comerciales que no se realizaron y sobre las cuales no existen pruebas ni



antecedentes de su ejecución, que le permitieron aumentar de forma artificial y dolosa los Créditos Fiscales IVA que Claudia Andrea Saldivia Vidal tenía derecho hacer valer, configurando de esta forma el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso segundo del Código Tributario.

Asimismo, para los años tributarios 2016, 2017 y 2018 utilizaron dichos documentos, específicamente 67 documentos tributarios falsos con el objeto de rebajar artificiosamente la Renta Líquida Imponible del Impuesto de Primera Categoría, declarando en los Formularios N°22, sobre Impuestos Anuales a la Renta, correspondiente a los Años Tributarios 2016, 2017 y 2018 una renta líquida imponible inferior a la que le hubiese correspondido determinar, al incorporar en su contabilidad y luego en las declaraciones impositivas respectivas estas 67 facturas falsas, configurándose respecto de José Manuel Ovando Pérez, en su calidad de mandatario y representante legal de Claudia Andrea Saldivia Vidal, el delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso primero del Código Tributario.

Los hechos anteriormente descritos, a juicio del acusado particular configuran el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, tienen el carácter de reiterados, de conformidad a lo establecido en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, toda vez que las maniobras ilícitas desplegadas por el querellado fueron cometidas durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. De este modo, de acuerdo con la referida norma y al artículo 351 del Código Procesal Penal, la pena debe ser aumentada en uno o dos grados respecto de los acusados.

Plantea que a los acusados José Manuel Ovando Pérez, en su calidad de mandatario y representante legal de Claudia Andrea Saldivia Vidal, les corresponde participación en calidad de autores de cada uno de los delitos descritos en la presente acusación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 N°1 del Código Penal, todos ellos en el grado de consumados.

Reconoce que respecto a ambos acusados, les beneficia la atenuante de responsabilidad penal establecida en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, tener irreprochable conducta anterior.



Asimismo, se les aplica la norma de determinación de pena establecida en el inciso 4° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario menciona en el evento de utilizarse documentación tributaria falsa se aplicará la pena mayor asignada al delito más grave.

Por último, se debe considerar lo establecido en el artículo 112 inciso 2° del Código Tributario, el cual establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el N°10 del artículo 97, en los demás casos de infracciones a las leyes tributarias, sancionadas con pena corporal, se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de ellas en más de un ejercicio comercial anual.

Finalmente solicita la imposición de la pena correspondiente a presidio mayor en su grado mínimo (10 años) y multa del 300% del total de los tributos evadidos con los ilícitos cometidos, y las penas accesorias de los artículos 27 y siguientes del Código Penal, con expresa condenación en costas, por los delitos contemplados en el artículo 97 N°4, incisos primero y segundo del Código Tributario.

SEGUNDO: Convenciones probatorias. Que según consta en el considerando sexto del auto de apertura los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

TERCERO: A.- Alegatos de cargo del Ministerio Público. En su alegato de apertura, la Fiscalía plantea que el juicio se centrará en torno al pago de dos impuestos: en primer lugar, en el IVA y, posteriormente, en el impuesto a la renta. El IVA es la base del impuesto a la renta, y una infracción en el primero conlleva una infracción al segundo.

La Fiscalía define el IVA como un impuesto regresivo, lo que significa que su costo se transfiere al consumidor final. Esta transferencia se realiza mediante diversos actos comerciales, como la emisión de facturas, que son documentos crediticios que representan un derecho pecuniario a favor del Estado para generar un crédito fiscal para el comerciante. Cuando un comerciante infringe la normativa, puede utilizar estas facturas para aumentar sus gastos y reducir su carga fiscal.



El Estado regula el uso de las facturas con el objetivo de evitar conductas fraudulentas y, para ello, establece el tipo penal descrito en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario. En el caso en cuestión, todas las facturas que se presentarán como medio de prueba fueron emitidas por contribuyentes cuestionados, quienes no prestaron ningún servicio real a los acusados.

La Fiscalía indica que la defensa al sostener que los servicios sí fueron prestados por otras personas, usando facturas de un tercero para pagar dichos servicios, se interrumpe la cadena de valor, lo cual impide al fisco recibir el monto correspondiente de los impuestos.

En este mismo orden de ideas la persecutora señala que los servicios eran de transporte, los cuales eran falsos, evidenciando irregularidades en la forma de pago y la nula acreditación de la adquisición de mercadería para el traslado desde Santiago a Coyhaique. Se alega que más del 50% del monto de las facturas se pagaba en efectivo a los choferes de los camiones que transportaban la mercancía, sin dejar constancia de quién recibía el pago, ni de los montos exactos.

Destaca que los acusados eran representantes de Pepsico y de la Compañía de Cervecerías Unidas, empresas que no cobran por el transporte de sus productos, los cuales son entregados directamente en la ciudad de Coyhaique.

Asimismo, afirma que las empresas de transporte involucradas no son localizables y que tampoco han declarado la compra de combustible, ni el pago de sueldos, ni compra de insumos, lo que refuerza la sospecha de que se trataba de un uso consciente y reiterado de facturas falsas.

Que en el caso de la compañía Carsal Ltda., se llevó a cabo otra maniobra destinada a reducir la carga tributaria y aumentar indebidamente el crédito fiscal. Claudia Saldivia, propietaria parcial de Carsal Ltda., realizó un reconocimiento de deuda hacia ella misma, teóricamente comprando productos a Comercial Carsal y aplicando estos gastos a su carga tributaria. Según la Fiscalía, se



acreditó un monto de 14 millones de pesos en estas operaciones, pero solo se realizaron pagos por concepto de impuesto de \$24.000 pesos.

En conclusión, el persecutor argumenta que no quedará duda que las facturas utilizadas para obtener crédito fiscal no correspondían a servicios realmente prestados, por quienes aparecían como emisores de dichas facturas; todas estas acciones fueron llevadas a cabo por José Ovando Pérez en calidad de administrador, y por Claudia Saldivia Vidal como contribuyente, quien no podía desconocer que se estaban realizando estas actividades fraudulentas.

Finalmente en la etapa de clausura, argumenta que para comprender lo que ocurrió entre 2015 y 2018, es fundamental considerar dos puntos clave: Uso de facturas falsas: facturas que no reflejan operaciones reales y las maniobras para evadir impuestos, estrategias para pagar menos impuestos de lo debido.

Indica que el sistema tributario se basa en la buena fe del contribuyente, ya que es éste quien declara sus operaciones y calcula el pago de impuestos. Por tanto, es crucial que estas declaraciones sean veraces y objetivas.

Expuso los hechos cronológicamente, comenzando en 2015 hasta el año 2018. En ese año, Carsal enfrenta un déficit financiero y realiza una serie de maniobras que terminan eludiendo el pago de IVA. A fines de 2015, Carsal vende productos a Claudia Saldivia, imputando el valor de esos productos a una deuda previa. Esta operación se documenta con facturas, pero Carsal no paga el IVA correspondiente. De los 14 millones de pesos en IVA que debía pagar, solo declara \$74.000 pesos.

Reconoce que Claudia Saldivia, bajo la dirección de José Ovando, compra esos productos y utiliza el crédito fiscal no pagado por Carsal para reducir sus propios impuestos. Esto demuestra una maniobra clara para diluir el pago de IVA, trasladando el IVA no pagado de Carsal a la reducción de impuestos de Claudia Saldivia. Este patrón de uso de facturas falsas se repite en los años 2016, 2017 y 2018. No se trata de que los acusados no fueran comerciantes o que no realizaran actividades comerciales, sino de que las facturas emitidas no reflejan las operaciones reales que supuestamente documentan.



Plantea que las facturas se emitían a petición de un tercero, realizando una coordinación con un sujeto llamado Carlos Muñoz Vázquez, pero los pagos se hacían a Luz Reyes Cerda por un valor mucho menor que el descrito en la factura; y supuestamente el resto se pagaba en efectivo a choferes no identificados. Nombra que las empresas involucradas (Sustagro, Asimet Assistant Group, Lavín, La Minga, etc) no pagaron el IVA por los servicios supuestamente prestados, y no existen registros de combustible, sueldos o compra de neumáticos, lo cual levanta un manto de dudas respecto de la prestación..

Además, estos proveedores son inubicables, con domicilios falsos, lo cual es una señal clara de que estas operaciones eran ficticias. Los acusados no pudieron presentar facturas de compra en Santiago que justificaran el transporte de mercancías. Las ventas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 no aumentaron, a pesar de que supuestamente se realizaron compras de productos en diciembre de 2016 con altos costos de transporte.

Menciona que José Ovando afirmó que compraban productos en Santiago debido a la pérdida de representación de distribuidores importantes como lo era Cervecerías Chile y Pepsico. Sin embargo, se ha demostrado que José Ovando continúa representando a Pepsico a través de otra empresa, Patagonia Distribuidora, y que Pepsico no cobra por flete, sino por el producto puesto en la bodega del distribuidor.

Por su parte la defensa de José Ovando Pérez ha presentado inconsistencias en su hipótesis, una de las cuales se refiere a la forma cómo conoció a Carlos Muñoz Vázquez, lo cual recalca un patrón de su conducta engañosa. Este patrón se repite sistemáticamente, mostrando un promedio de un camión a la semana desde abril de 2017, con ciertos meses sin registro de transporte, lo cual sugiere el uso de facturas falsas para justificar créditos de IVA inexistentes. Por lo anterior solicitó un veredicto condenatorio para los acusados.

B.- Alegatos de cargo del Acusador particular.- Nos relata en sus alegaciones iniciales que toda persona que realiza actividad económica en Chile,



debe emitir boletas y facturas, no solo son relevantes para quien los emite sino también para aquellos que lo reciben. Se debe tener presente a lo largo del juicio que no es indiferente para el fisco quien emite la factura, ya que el sistema tributario deposita una considerable fe en dicho documento, lo que reviste en el contenido del mismo.

De esta manera el querellante realiza una relación detallada de los contribuyentes, la forma de contabilidad, como actuó Ovando Pérez en esta causa y la manera en la cual los acusados dejaron de pagar y evadieron los impuestos del valor agregado y el impuesto a la renta, definiendo en esta relación cual es el rol que mantiene el contribuyente respecto del IVA y como este tributo fue usado para disminuir su carga impositiva en las obligaciones tributarias a las cuales debían contribuir.

En sus planteamientos finales indica que con la prueba presentada, queda claro que Claudia Saldivia y José Ovando obtuvieron facturas falsas de transportes a través de Carlos Muñoz. Estas facturas cumplen con los requisitos típicos de empresas que suministran facturas falsas para aumentar ilícitamente el crédito fiscal, como lo es su rápida constitución, suelen operar desde direcciones inexistentes, no tienen infraestructura, ni capital suficiente y no pagan IVA, ni renta, o lo hacen en montos insignificantes para evitar el escrutinio del Servicio de Impuestos Internos.

El propósito de estas empresas es proporcionar un crédito fiscal falso a contribuyentes que sí pagan impuestos, pero buscan reducir su carga impositiva de manera ilícita, ya sea para maximizar sus ganancias, reinvertir en el negocio o enfrentar dificultades económicas.

En el caso de Carsal, se demostró que las dificultades económicas no justifican el uso de estas facturas falsas y no eximen a los acusados de responsabilidad. Se ha evidenciado que Claudia Saldivia, controladora de Carsal, y José Ovando, con amplio poder de administración, estaban al tanto de la situación precaria de la empresa y emitieron 14 facturas sabiendo que no podrían pagar el débito fiscal reflejado en ellas. A pesar de los intentos de la defensa de desvincular a Ovando de la administración de Carsal, la evidencia



demuestra que él estaba involucrado en la toma de decisiones y en la obtención de estas facturas.

Por su parte Carlos Muñoz, quien se presenta como un intermediario o bróker, está también querrellado por el Servicio de Impuestos Internos por los mismos hechos que se imputan a Saldivia y Ovando. Este individuo ha sido identificado como un proveedor de facturas falsas, no de servicios reales de transporte.

Durante 2016, se realizó una factura de 15 millones de pesos netos con \$2.085.000 pesos de IVA para un transporte cuya mercancía no se ha podido verificar. En 2017, se incrementó la obtención de facturas falsas para aumentar el crédito fiscal y reducir los gastos, registrándose facturas de distintas empresas por transportes idénticos y de montos sospechosamente similares. En 2018, el esquema continuó con 12 facturas más, coincidiendo con el inicio de una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, lo que revela un patrón de conducta fraudulenta.

Es evidente que los proveedores de transporte son empresas ficticias, y la falta de documentación y registros de pagos en efectivo refuerza esta conclusión. La defensa de los acusados ha intentado desviar la atención hacia fallos del tribunal tributario y apelaciones civiles, pero estos fallos no afectan la validez de las pruebas penales presentadas.

Relata que Claudia Saldivia y José Ovando, conscientes de la falsedad de las facturas y de su ilegalidad, utilizaron el crédito fiscal asociado para reducir su carga impositiva, cometiendo así los delitos imputados. La conducta de los acusados encuadra en los delitos previstos en el artículo 97 número 4, incisos primero y segundo, del Código Tributario, que penaliza declaraciones falsas y maniobras para aumentar indebidamente créditos fiscales. Por lo tanto, solicitó que se considere la responsabilidad de los acusados y se dicté un veredicto condenatorio.

CUARTO: A.- Alegaciones de la Defensa de Ovando Pérez. En el alegato de apertura argumenta que planteara dos alegaciones principales. La



primera de ellas se encuentra relacionada con los vicios que nacen desde la acusación particular, toda vez que omite presupuestos fácticos, los cuales son base fundante del presupuesto del tipo penal. Indica que su oportunidad recurre de este vicio, para los efectos de preparar el recurso de nulidad.

Hace presente que el querellante en el presente caso ha recurrido tanto a la infracción de la obligación tributaria como a la acción penal en contra de su representado, en la primera de ellas fue vencido en doble instancia, lo cual sin lugar a dudas influirá en el presente caso.

Cuestiona la acusación fiscal en cuanto que se ha hecho valer en la dictación del auto de apertura otras circunstancias de comisión, lo cual necesariamente lleva a la nulidad del acto procesal. Alega discordancia entre la formalización y los hechos expuestos en la acusación impidiendo al Tribunal condenar con los requisitos 341 del CPP.

En lo que respecta al segundo punto de su alegación plantea que la prueba de cargo tiene falencias importantes, ya que es la misma prueba del Tribunal Tributario Aduanero, (ahora en adelante TTA), la cual pierden en las dos instancias.

Por otra parte comparte la aseveración del acusador que el impuesto del IVA es una cadena que parte por el emisor tributario, siendo investigados solo un emisor, porque la formalización da cuenta de 73 y la acusación señala 67 y cuando se investiga a este se concluye que los servicios fueron prestados.

Cuestiona la labor investigativa del Ministerio Público y las primeras facturas salen de Carsal que son cuestionadas porque tuvieran una operación real con la contribuyente Saldivia Vidal. Sin perjuicio de ello, la sociedad Carsal está compuesta por Saldivia y el socio Jorge Carmi el cual no fue investigado, solicitando que se ponga atención en los aspectos antes mencionados.

Una vez concluida la etapa de prueba la defensa insiste en sus alegaciones, plantea dos cuestiones previas. En primer lugar, el juicio presenta vicios de nulidad que deben ser considerados. El primero surgió durante la preparación del juicio oral, cuando se pidió la detención del proceso por falta de



una acusación válida, ya que el presupuesto fáctico de la acusación no estaba claramente especificado. A pesar de que se presentó un recurso de aclaración o enmienda, el auto de apertura seguía presentando una narración confusa y contradictoria en cuanto a la falsedad de las facturas.

El segundo vicio de nulidad se presentó durante la litigación del juicio, cuando se cuestionó la validez de la prueba y la coherencia de los cargos, sin que el tribunal tomara acciones correctivas.

Respecto a la cuestión de fondo, el primer argumento es que el sujeto activo del delito debe ser el contribuyente. De acuerdo con el artículo 99 del Código Tributario, solo los administradores pueden ser responsables en el caso de personas jurídicas. Sin embargo, el caso trata de una empresa personal, no una jurídica, por lo que el tipo penal aplicable no es el adecuado.

Además, el perjuicio, que es una condición objetiva de punibilidad, no se puede considerar probado en este caso. La absolución del contribuyente en el Tribunal Tributario y la anulación de los giros realizados por el Servicio de Impuestos Internos demuestran que Claudia Saldivia no tiene deuda con el fisco, lo que impide argumentar un perjuicio real.

En cuanto a la falsedad de las facturas, se ha discutido ampliamente durante el juicio. Las transferencias realizadas por Claudia Saldivia a la esposa del bróker Carlos Muñoz superan el monto total del IVA que se debía pagar por los transportes, lo que cuestiona la lógica de la acusación de falsedad de facturas.

Además, el volumen de facturación de la empresa y el comportamiento del contribuyente demuestran una buena fe mercantil. No es razonable pensar que un contribuyente, con un gran volumen de facturación y sin indicios claros de falsedad, tendría que dudar de cada factura recibida. La falta de pruebas contundentes de que las facturas eran falsas y la ausencia de sospechas fundadas por parte del contribuyente llevan a la conclusión de que no se puede demostrar la intención de cometer el delito.



Por lo tanto, solicitó la absolución de su representado de los cargos que se le imputan.

A.- Alegaciones de la Defensa de Saldivia. A su turno la defensa de la acusada se adhiere a los vicios alegados por la defensa de Ovando Pérez. Añadiendo que se ponga atención en la prueba que no existirá en este juicio, ya que los acusadores han mencionado “el uso de facturas falsas”, respecto de la emisión y enriquecimiento del crédito IVA, pero en toda la investigación no se toca a los emisores siendo la piedra angular faltante que no se presentara en estrados.

Hace presente que no se debe olvidar que se trata de un contribuyente tributario que utilizó ciertas facturas que los acusadores señalan que son falsas tampoco se ha hecho alusión que el Tribunal Penal tiene un estándar más alto que el propio TTA para dictar un veredicto de condena donde con la misma prueba y mismas facturas y que el Tributario no se alcanza el convencimiento de este perjuicio o deuda de las facturas. Finalmente solicita que se dicte una decisión de absolución para su representada.

En sus alegaciones finales el abogado letrado quiere aclarar ciertos puntos mencionados por el Ministerio Público. En primer lugar, refuta la idea de que la debacle comercial de Carsal fue la intención de su representada para emitir las 14 facturas y aprovecharse del IVA., sin pagar el impuesto correspondiente. Argumenta que la verdadera intención no fue la evasión fiscal, ya que la deuda relacionada con Carsal no se ha recuperado y la persona encargada de la administración de la empresa no ha comparecido ante el Ministerio Público para explicar el manejo fiscal.

Además, letrado señala que se ha cuestionado la pérdida de representaciones de marcas como Cervecerías Chile y Pepsico. Sin embargo, se argumenta que Carsal sigue manteniendo estas marcas y que, a pesar de la deuda significativa generada con Cervecerías Chile y Pepsico, el representado, don José Ovando, pagó para mantener las marcas.



Respecto al Servicio de Impuestos Internos, se menciona que la supuesta debacle comercial y los problemas con el servicio no justifican las acusaciones. El orador destaca que el artículo 97 del Código Tributario exige un estándar probatorio de dolo directo, no solo indicios. Esto significa que se debe demostrar la intención específica del contribuyente de defraudar al fisco, algo que, según a su juicio, no ha sido probado.

En relación al perjuicio fiscal, plantea un escenario hipotético en el que, si el Tribunal acepta las reclamaciones y anula los impuestos relacionados con las facturas, se generaría una contradicción al condenar a su representado por un delito tributario basado en las mismas facturas. Aclara que la Corte Suprema no es una instancia de revisión de hechos y que las sentencias de primera y segunda instancia ya se han pronunciado. Por lo tanto, concluye que no se cumplen los requisitos del artículo 97, incisos primero y segundo, en el caso de su representada. Por consiguiente, solicita la absolución o, en su defecto, la condena basada en los argumentos presentados.

QUINTO: Declaración o Autodefensa de los acusados. Los acusados informados por el Juez Presidente de su derecho a guardar silencio y de los alcances que importa su renuncia, para ejercer su autodefensa de conformidad a lo preceptuado en el artículo 326 inciso tercero, en relación con el inciso segundo del artículo 8, ambos del Código Procesal Penal, optaron por declarar señalando lo siguiente.

Declaración de Ovando Pérez.

El acusado es consciente del motivo por el cual se encuentra en estrados, que es el uso de facturas falsas ideológicas para reducir el pago de impuestos. Afirma ser pareja de Claudia Saldivia, quien es comerciante, con la cual tiene tres hijas en común. Relata que trabajó como funcionario público durante 25 años y, al retirarse, decidió ayudar a Claudia en sus negocios. Para ello, arrendó un local con derecho a llave y comenzó a colaborar. Señala que Claudia le otorgó un mandato, a nombre de ella como Claudia Saldivia Vidal, persona natural, y el nombre de fantasía del negocio era “Almacén San José”.



Reconoce que, inicialmente, les fue bien, tanto que abrieron dos locales más. Luego, apareció un proveedor con una distribuidora de cervezas y snack, incluyendo marcas como Corona y Budweiser de Cervecerías Unidas, además de productos de Pepsico. Este proveedor era Nelson Fabres, dueño de FACOR, quien les ofreció una oportunidad de negocio lucrativa, con ventas que alcanzaban los 150 millones de pesos.

Indica que Claudia Saldivia decidió solicitar un crédito en el banco donde tenía su cuenta y con ese dinero compró la empresa de Fabres. No obstante, Fabres impuso la condición de dejar a Jorge Carmi como administrador de la distribuidora, ya que estaba familiarizado con la operación de las empresas. De esta manera, Carmi quedó a cargo de la nueva distribuidora, denominada CARSAL Ltda. (en adelante, “Carsal”).

A partir de la administración de esta distribuidora, Carmi comenzó a solicitar mercancía y requerir inyección de dinero para la empresa Carsal. Como mandatario de Claudia Saldivia, el acusado entregaba dinero para las compras.

En una ocasión, el acusado relata que recibió una llamada de un ejecutivo de Cervecerías Chile, quien le informó que sabían que él actuaba como mandatario de Saldivia y que, desde hacía meses, no se les estaba pagando las deudas con las compañías. Por tal motivo, la cervecería había decidido enviar un equipo a Coyhaique para realizar una auditoría y revisar la situación de la. Al preguntarle cuánto se debía, el ejecutivo respondió que aún no tenían una cifra exacta.

Consultado al respecto, Jorge Carmi le indicó al acusado que la deuda era de aproximadamente 40 millones de pesos y que el resto del dinero estaba distribuido entre clientes en Aysén, Chile Chico y Coyhaique.

Ante esta información, para evitar problemas con un cliente tan importante, decidieron solicitar un préstamo de 40 millones de pesos al banco, en representación de Claudia Saldivia, y transferir el monto a Cervecerías Chile, enviando el comprobante de la transacción. Sin embargo, un ejecutivo de la



Compañía de Cervecería respondió que la deuda superaba con creces esa cantidad, por lo que habían decidido desplazarse a Coyhaique.

De esta manera el 1 de octubre de 2015, un equipo de Cervecerías Chile llegó con su personal y realizó un inventario en la bodega ubicada en Recta Foitzick, propiedad de Frigonsa. Tras la auditoría, determinaron que el monto total de la deuda ascendía a 280 millones de pesos, sin contar los 40 millones que ya se habían pagado.

Frente a este panorama, Ovando Pérez y con el objeto de continuar con sus operaciones la compañía le solicita que realice un reconocimiento de deuda por lo que él, actuando en representación de los socios Jorge Carmi y Claudia Saldivia, quienes le habían otorgado mandato acude a la notaría y firma el documento. No obstante, para su sorpresa, el equipo de Cervecerías Chile luego de firmado el documento retiró toda la mercancía de la bodega y reasignó la representación a otra distribuidora, dejando a Carsal sin la representación. Esto precipitó la decadencia de Carsal, ya que esta compañía era una fuente significativa de ingresos.

Ante esta crisis, y siguiendo el mandato de los socios, Ovando Vásquez nombra a Vicentina Latanzi como nueva administradora de Carsal, se pidiéndole a Jorge Carmi que se retirara, para intentar resolver el problema, ya que su gestión había provocado la falta de pagos a Cervecerías Chile.

Por su parte el acusado precisó que Cervecerías Chile vendía directamente a supermercados, mientras que Carsal atendía a pequeños negocios. Ambos tipos de ventas se gestionaban a través de Carsal, y los pagos eran recibidos por Jorge Carmi, quien sólo depositaba los cheques nominativos, en tanto que el dinero en efectivo no se registraba.

Recuerda que Claudia Saldivia estaba muy molesta con Jorge Carmi, ya que le había otorgado el 30% de la empresa bajo el compromiso de que le pagaría conforme la empresa generara utilidades. Posteriormente, hablaron con Carmi y le pidieron que se retirara de la sociedad. Este accedió a la propuesta en primera instancia, solicitando que el abogado Marcelo Panichini redactara los



documentos para formalizar su salida, los cuales firmaría al día siguiente, pero eso nunca sucedió. Más tarde, Carmi contrató a otro abogado, quien exigía 60 millones de pesos por firmar su salida de la sociedad, alegando que él había prácticamente quebrado la empresa.

El conflicto escaló al punto de que el padre de Carmi comenzó a retirar computadores de las oficinas de Carsal, lo que generó preocupación por la posible pérdida de información relevante. Eventualmente, Jorge Carmi dejó de asistir a la bodega y abrió una nueva distribuidora en sociedad con la señora Cruz, formando la sociedad Carmi y Cruz. Juntos, formaron una nueva sociedad, llevándose a los vendedores de Carsal y dejando a la empresa en una situación crítica, ya que tenía mercadería pero no vendedores.

Para mitigar la situación, el acusado pidió a un colaborador que realizara un inventario de la mercadería restante y, junto a una nueva contadora auditora contratada, solicitó una revisión para determinar los montos inyectados desde la empresa individual de Claudia Saldivia a Carsal, detallándose un monto de 142 millones de pesos.

Con el mandato emitido por los socios de Carsal, se efectuó un reconocimiento de la deuda y, posteriormente, se realizó una dación en pago, incluyendo mercancías, bienes y vehículos, para compensar el dinero inyectado por Claudia Saldivia. La mercadería fue trasladada a una nueva bodega ubicada en calle Sargento Aldea, aunque gran parte de ella estaba vencida, para tratar de recuperar parte de lo invertido y saldar la deuda con Claudia Saldivia. Aclara que las facturas utilizadas eran legítimas y se trataba de mercancía real que no podía seguir perdiéndose.

El acusado menciona que este conflicto marcó el inicio de su calvario, ya que Jorge Carmi, con influencias por los nexos de su padre en la Defensoría Penal Pública y su madre en otra institución pública, y la amistad con José Vargas Chaura, usó esa autoridad para someterlos a múltiples fiscalizaciones. Durante esas inspecciones, las mismas facturas fueron revisadas en variadas ocasiones. Este acoso constante los obligó a contratar topógrafos para demostrar que algunos trabajos que estaban siendo cuestionados se probaron que se habían



realizado. Precisa que se gastaron más de 100 millones de pesos en este proceso, esta situación ocasiono conflictos constantes con Claudia.

El acusado concluye que todo este asunto ha sido una persecución, ya que la factura de la mercadería de Carsal se emitió para evitar más pérdidas, y gracias al reconocimiento de la deuda con Cervecerías Chile, se ganaron una causa judicial.

Actualmente, el acusado tiene cinco negocios: cuatro minimarkets y un supermercado. Para seguir creciendo, viajaba constantemente a Santiago en busca de distribuidores. En uno de estos viajes, conoció a un hombre de apellido Muñoz, quien le ofreció sus servicios de transporte, asegurando tener muchos contactos y proveyendo un transporte semanal que llegaba a Coyhaique con hasta 10 camiones por semana.

Plantea que Muñoz emitía facturas por sus servicios, que eran la base para los pagos de transporte. El acusado no recuerda si se conocieron en Lo Valledor o en otro lugar, pero afirma que siempre manejó las operaciones con Muñoz a través de correo electrónico y mensajería, sin tener un contacto personal significativo.

El pago de estos servicios se realizaba en efectivo, y no siempre dejaba registro del nombre de los choferes, ya que había una relación de confianza con Muñoz. El acusado aclara que no se preocupaba por quién era el dueño de los camiones o si tenían guías de despacho, aunque entendía que sí las había.

El acusado destaca que nunca tocó dinero que no le correspondiera durante sus 27 años como funcionario público, de los cuales 7 años fue jefe de finanzas en el Gobierno Regional, donde fue constantemente fiscalizado por la Contraloría. Este tipo de acusaciones lo tienen agobiado.

Respecto a las consultas del Ministerio Público, aclara que Claudia Saldivia era la contribuyente y él actuaba como su representante. En cuanto al manejo de las facturas, sostiene que todas las operaciones se realizaban de manera legítima y que no hubo intención de defraudar al fisco.



Finalmente, manifiesta que nunca tuvo la intención de cometer fraude ni engañar a nadie. Afirma que sus acciones se basaron en las circunstancias y en la necesidad de mantener los negocios a flote. Insiste en que las acusaciones en su contra son infundadas y que su única intención fue proteger el bienestar de su familia y sus socios

B. Declaración de Saldivia Vidal.

Indica que se le acusa de declarar facturas ideológicamente falsas. Plantea que comenzó su carrera en 2012 como comerciante, en una distribuidora lo que le permitió conocer a varios locatarios, entre ellos Adrián Flores, dueño del local de calle Lautaro con 12 de octubre con el cual estableció una relación de amistad el cual le ofrece la venta de su local y esto le llama la atención. Sostiene que a los 18 años, ya tenía su propia casa y un trabajo. Con el ánimo de salir adelante, vendió su casa en calle Lautaro, y con el dinero de esa venta llamó a Adrián para comprar el local. Empezó con mucho entusiasmo junto con José, quien compartía su interés en el negocio, el cual llamaron Almacén San José. Este negocio creció rápidamente.

Recuerda que el crecimiento fue tal que abrieron locales en Sargento Aldea 665 y Galvarino 1594. Comenzaron a producir su propio pan y emplearon a tres panaderos que distribuían el producto a las tres tiendas. Además, adquirieron seis carros para la distribución del pan.

Conviene que José le mencionó que se encontraba a la venta una distribuidora que manejaba dos marcas importantes: Pepsico y Cervecería Chile, de las cuales ella no tenía productos en su sala, siendo el propietario Nelson Fabres Corval, además pariente de José, el cual les ofreció la mercadería, advirtiéndole que era un negocio arriesgado por los montos.

Indica que la empresa vendía entre 150 y 180 millones de pesos, y en ese momento aparece Jorge Carmi, un vendedor el cual asevera que manejaba la distribuidora con Fabres, con buena relación con las empresas, quien estaba a cargo de las compras y ventas con las compañías. A pesar de que Jorge no tenía trayectoria en el sector, decidieron darle la oportunidad de administrar la



empresa. Se firmó un contrato en el que Jorge mantenía un sueldo como administrador, y se quedaba con la misma plantilla de trabajadores y el mismo bodeguero que llevaba la empresa.

Sin embargo, a los seis meses, Jorge informó que no había dinero para pagar los sueldos. Ante ello llamó a Jorge pidiéndole explicaciones ya que esta empresa era rentable y le explicó que los fondos estaban por cobrar y mostró un listado de créditos traspasados a Carsal, quedándose tranquilo.

Precisa que para el 1 de octubre de 2015, surgió un problema: debían pagar 40 millones de pesos para evitar perder las marcas, por lo cual obtienen un crédito. Aunque lograron depositar el dinero, las cerveceras convocaron a una reunión con José, durante la cual se reveló que había una deuda de 180 millones de pesos. Cuando se enfrentó a Jorge sobre esta situación, él se mostró evasivo y cortó la comunicación y desde allí comenzó a vivir un infierno.

Puntualiza que la situación empeoró cuando descubrió que Jorge había utilizado fondos de la empresa para sus propios fines, incluyendo la compra de un teléfono de alta gama en Entel de alrededor de un \$900.000 pesos. En ese momento que Jorge ya no contestaba el teléfono aparece doña Vicentina Latanzi, quien fue administradora de la radio Santa María, a quien contactó y ofreció su apoyo. Vicentina sugirió contratar a una contadora, y así apareció Viviana Gallardo, quien ayudó a revisar y organizar la mercadería. Después de 3 días se apersona Jorge, el cual no dejaba trabajar a la nueva administradora sin entregar la información relevante para el funcionamiento de la empresa.

Por el contrario aparece esta persona con su padre llevándose los computadores lo que no permitía el correcto funcionamiento de la empresa y el crono de los créditos; incluso Jorge cobraba a los comerciantes.

Recuerda que aparece Pepsico, una semana después cobrando 90 millones de pesos más, no podía pagar el dinero a Cervecerías Chile como pagaría esa deuda, pero ella debía ser fuerte para sus hijas pequeñas, generando un desgaste físico y mental.



Manifiesta que Vicentina fue un apoyo ya que le ayudó a buscar una nueva contadora toda vez que Jorge se había llevado al contador de la empresa, apareciendo la Sra. Viviana Gallardo, lo primero que hicieron es recorrer la bodega para realizar un inventario, donde lo que llama la atención es la compra de pallets de calugas de caldos maggi, concluyendo que Jorge también había estado comprando compulsivamente grandes cantidades de productos, como pallets de leche evaporada, sin considerar la capacidad de venta de la empresa. Mucha de la mercadería estaba cerca de vencerse. En ese momento aparece con Viviana Gallardo quien fue fundamental para encontrar una solución a esta situación desordenada. Sin embargo, la mala gestión había llevado a Carsal a una crisis profunda, con deudas que se acumulaban y problemas éticos relacionados con la venta de productos a precios elevados. Por su parte, Carmi instaló una nueva distribuidora, con auto y casa nueva, incluso debió cambiar a su hijas de colegio por esta persona.

Finalmente, se descubrió que Jorge había estado recaudando dinero en efectivo de las empresas, y había problemas con la trazabilidad de esos pagos. Pepsico, a quien se le debían entre 80 y 90 millones de pesos, también se mostró preocupada por la situación. Todo esto provocó un desgaste físico y emocional significativo, especialmente porque tenía tres hijas que cuidar.

A pesar de los esfuerzos para resolver la situación, la empresa enfrentó dificultades continuas, incluidos problemas con el Servicio de Impuestos Internos y el sentimiento de persecución. Claudia siguió adelante, reconociendo que se habían cometido errores y que había confiado en la persona equivocada. Aunque se sintió sola y presionada, contó con el apoyo de su familia y amigos cercanos. Reconoce que actuó de ignorante y confiada en la gestión de Jorge Carmi, quien se aprovechó de ello.

Afirma que actualmente sigue siendo comerciante, proporcionando empleo a 120 familias. Aunque enfrenta desafíos y siente que el sistema le ha dado la espalda, sigue trabajando para superar las dificultades y proteger su negocio y su reputación.



Ante las consultas del Ministerio Público señala que en diciembre de 2015, Carsal dejó de tener movimientos, aunque su contadora Viviana debía responder a ciertos temas y es ella quien llevó toda la información. En ese momento, no se podía emitir facturación, ya que no tenía el soporte para operar incluso mantenía relaciones comerciales con Pepsico, pero no podía facturar. Sin embargo, esta relación estaba activa pero restringida en sus operaciones.

Plantea que Carsal adquiría productos que generaban facturas, correspondientes al traslado de mercadería a la sala de ventas. Estas facturas eran emitidas por Carsal como sociedad. El declarante no recuerda exactamente cómo se realizaba la declaración de estos documentos.

Recuerda que Carsal tenía una deuda de 144 millones de pesos con ella, lo que no cubría todas sus obligaciones. Para saldar parte de esta deuda, Carsal realizó pagos con mercancía. Este pago en especie generaba una factura, utilizada para cubrir las deudas que se tenían a título de persona natural. Todos los movimientos financieros se llevaban a cabo bajo la supervisión de un profesional en contabilidad, careciendo de experticia contable. Respecto de la contabilidad de las mercaderías que fueron entregadas en dación de pago por la deuda, desde Carsal a su patrimonio, no recuerda si fueron registradas en sus libros, ni tampoco sabe si Carsal pagó los impuestos por esas facturas ya que ella lo que pretendía era salvar la mercancía y no perder más dinero.

Afirma la declarante nunca se involucró personalmente en estos asuntos financieros, pero contaba con un contador para estas gestiones, ya que su rol era el de comerciante, por lo que estaba obligado a pagar el IVA.

Se intentó utilizar la mercancía restante para recuperar parte del dinero invertido. Las decisiones se tomaron con base en las recomendaciones del contador. La mercadería remanente en Carsal se contabilizó en los libros de Claudia Saldivia como persona natural. Estas operaciones probablemente también se consideraron para la declaración de pagos e impuestos.

Sobre el transporte de mercancías que no pertenecían a Carsal, **José se encargaba de estos asuntos.** Había ciertos aspectos del negocio que manejaba



José, relacionados con la logística y el trato con los camioneros. La declarante menciona que los camiones solían ser distintos y que, aunque vio algunos de estos vehículos, no estaba involucrado en su gestión diaria.

Las facturas relacionadas con estos transportes se pagaban a intermediarios, y los choferes también recibían su parte del pago. El declarante no participaba directamente en estos pagos ni conocía los montos exactos de las facturas. Las transferencias relacionadas con estos pagos aparecían en las cuentas corrientes de Carsal, y se inyectaba dinero para asegurar las marcas importantes. Reconoce que se cometen errores, desconoce si Muñoz era el representante de las empresas, ella no participa en esas transacciones. En el inicio José comenzó en un negocio familiar luego que dejó de trabajar.

Indica que no recuerda si José tenía un mandato como persona natural, pero le menciona el documento de mandato general fechado el 17 de agosto de 2017, emitido a nombre de Claudia Saldivia como persona natural, lo recuerda como él otorgado.

Antes del año 2017, Claudia Saldivia manejaba las representaciones por su cuenta. En cuanto a Carsal, no está seguro de si existía un mandato específico, y cualquier decisión que se tomara se discutía entre José y Jorge, quienes eran socios.

Manifiesta que no sabe cómo se manejaba la declaración del IVA ni la declaración de la renta, ya que estas gestiones estaban a cargo de contadores. El pago de impuestos sobre las facturas se realizaba mediante pagos en efectivo y transferencias bancarias. José se encargaba de la gestión de la mercadería en Santiago, aunque el declarante no conoce los detalles del pago de esos productos. Los choferes recibían sus pagos en efectivo, y algunas empresas, diferentes a las de Muñoz, eran las encargadas de realizar los transportes.

En cuanto a las facturas de transporte desde Santiago a Coyhaique, la mercadería transportada incluía abarrotes, frutas y otros productos. El declarante no recuerda los nombres específicos de los proveedores ni se involucraba directamente en las compras. Estos productos se destinaban a los locales de



venta, e incluían frutas, fideos, arroz, aceite, entre otros. Las primeras cargas incluían frutas y eran transportadas en camiones refrigerados, que mantenían la temperatura necesaria para productos perecederos como el pollo.

En relación a la compra de la empresa, se confirmó que esta se hizo mediante un préstamo y que Carsal contaba con vehículos para el transporte de mercancías. No se recordó el valor exacto de la compra ni los detalles sobre el pago del IVA.

A las consultas del Tribunal identifica a Jorge Vargas Chaura como un fiscalizador de SII el cual era conocido o amigo de Jorge Carmi. En torno a la compra de la sociedad distribuidora no recuerda cual fue el monto que ellos pagaron al señor Nelson Fabres.

Por último, en el momento fijado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, luego que el Presidente de la Sala les informara que tenían derecho a manifestar lo que le pareciere o estimare conveniente en relación con el juicio seguido en su contra. Haciendo uso de la palabra José Ovando Pérez señala que se aprovecharon de su desprolijidad en el manejo de la empresa; por lo cual ha aprendido con este juicio y durante los 5 años que ha durado esta investigación; es una persona honesta y escuchar cosas negativas de él le duele mucho. En tanto Saldivia Vidal, señala que está orgullosa de ser comerciante local que con lo cual genera empleos para más de 120 familias, desea trabajar tranquila y seguir siendo comerciante que es lo que más le gusta.

SEXTO: La prueba de cargo. Con la finalidad de justificar su cargo y acreditar las circunstancias del hecho punible la fiscalía rindió la siguiente prueba:

I.- PRUEBA TESTIMONIAL:

Consistente en las declaraciones de: 1.- José Luis Vargas Chaura, fiscalizador del SII. 2.- Rodrigo Millán Salazar, funcionario público PDI. .

II.- PRUEBA DOCUMENTAL:



A cuyo efecto se incorporó: 1.-Cuaderno de recopilación de antecedentes respecto de los hechos materia de la acusación, que corresponden a tres archivadores que contienen, entre otros, los siguientes antecedentes:

1.- Factura electrónica 37 de fecha 28-07-2017 del proveedor Assistance Group SPA RUT 76.725.632-9.

2.- Facturas N° 111 de fecha 05-01-18; 116 de fecha 12-01-2018; 124 de fecha 19-01-2018; 242 de fecha 26-01-2018; 340 de fecha 03-02-2018; 345 de fecha 10-02-2018; 353 de 17-02-18; 385 de fecha 24-02-18; 613 de 03-03-18; 619 de 10-03-18; 626 de 17-03-18 y 775 de fecha 31-03-2018, todas del proveedor La Minga SPA RUT 76.390.048-7

3.- Facturas N° 136 de 04-08-2017; 145 de 11-08-2017; 187 de 18-08-2017; 200 de 25-08-2017; 257 de 02-09-2017; 276 de 09-09-2017; 291 de 16-09-2017; 301 de 23-09-2017; 394 de 30-09-2017; 492 de 06-10-2017; 500 de 13-10-2017; 532 de 20-10-2017; 543 de 27-10-2017; 768 de 03-11-2017; 776 de 10-11-2017; 784 de 17-11-2017; 853 de 24-11-2017; 860 de 30-11-2017; 964 de 02-12-2017; 970 de 09-12-2017; 975 de 16-12-2017; 1009 de 23-12-2017 y 1131 de 29-12-2017, todas del proveedor Group Ingenierías Lavín SPA.

4.- Factura 443 de 26-12-2016 de la empresa Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada

5.- Facturas 749 de 28-04-2017; 730 de 21-04-2017; 723 de 14-04-2017; 708 de 07-04-2017; 924 de 06-05-2017; 936 de 27-05-2017; 943 de 31-05-2017; 927 de 13-05-2017; 932 de 20-05-2017, todas del proveedor Servicios Integrales ASIMEC

6.- Facturas 451 de 30-06-2017; 445 de 23-06-2017; 439 de 09-06-2017; 434 de 09-06-2017; 608 de 07-07-2017; 613 de 14-07-2017; y 621 de 21-07-2017 del proveedor Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada

7.- Facturas 13195 de 01-12-2015; 13194 de 03-12-2015; 13210 de 07-12-2015; 13203 de 07-12-2015; 13212 de 07-12-2015; 13205 de 07-12-2015; 13216 de 10-12-2015; 13202 de 05-12-2015; 13220 de 10-12-2015; 13206 de



07-12-2015; 13211 de 07-12-2015; 13218 de 10-12-2015; 13207 de 07-12-2015 y 13209 de 07-12-2015, todas del proveedor Distribuidora Comercial Carsal Limitada

8.- Informes de verificación de documentos tributarios de Claudia Saldivia Vidal.

9.- Informe de verificación de documentos tributarios en el sistema SICT, e informes de verificación de antecedentes de las empresas Assistance Group SPA; La Minga SPA; Group Ingenierías Lavín SPA; Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada; Servicios Integrales ASIMEC; Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada; Distribuidora Comercial Carsal Limitada. Dentro de los periodos materia de la acusación.

10.- Formularios 29, dentro de los periodos materia de la acusación de las empresas Assistance Group SPA; La Minga SPA; Group Ingenierías Lavín SPA; Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada; Servicios Integrales ASIMEC; Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada; Distribuidora Comercial Carsal Limitada.

11.- Formularios 29, dentro del periodo materia de la acusación de la acusada Claudia Saldivia Vidal.

12.- Reconocimiento de deuda de CARSAL Limitada a Claudia Saldivia Vidal.

13.- Mandato general de administración de Claudia Saldivia Vidal a José Manuel Ovando Pérez.

14.- Liquidación y giros de Carsal Limitada.

15.- Declaraciones de renta de Claudia Saldivia Vidal dentro de los periodos materia de la acusación.

16.-Hoja foliada 427 con asiento contable de egreso N° 3 de 31-12-2015

17.- Daciones en pago de CARSAL a Claudia Saldivia REP 3284-2014 y 1303- 2015.



18.- Copia de sentencia de fecha 16 de agosto de 2022 del Tribunal Tributario y Aduanero respecto de reclamación de liquidaciones respecto de los hechos materia de la acusación.

III.- PRUEBA PERICIAL. Consistente en los Informes pericial contable N° 09/2020 y N°09/2023, suscrito por Carmen Opazo Valdés e introducido bajo la forma del artículo 332 letra b del Código Procesal Penal

Consistente

En tanto el acusador particular además de hacer suya la prueba del Ministerio Público se valió de la siguiente prueba.

Prueba documental. Consistente en el: 1.Informe de recopilación de antecedentes N° 12 de fecha 05-03-2019 del Servicio de Impuestos Internos emitido por el fiscalizador José Luis Vargas Chaura. 2.- Copia de libro de ventas electrónicas dentro de los periodos materia de la acusación, y copias de facturas emitidas por José Ovando Pérez. 3.- Libro diario de la contribuyente acusada dentro de los periodos de la acusación.

SÉPTIMO: Pruebas de las Defensas. Las defensas para acreditar sus alegaciones se valieron de la misma prueba rendida por el Ministerio Público, haciendo uso en su oportunidad de la facultad de contrainterrogar a los testigos. Además de incorporar la siguiente prueba:

I.- DOCUMENTAL: consistente en: 1.- Reconocimiento de deuda de CARSAL a Cervecerías Chile SA. 2.- Daciones en pago de CARSAL a Claudia Saldivia REP 3284-2014 y 1303- 2015. 3.- Copia de libro de ventas electrónicas dentro de los periodos materia de la acusación, y copias de facturas emitidas por José Ovando Pérez. 4.- Libros diarios de la contribuyente acusada, dentro de los periodos materia de la acusación. 5.- Copia de sentencia de fecha 16 de agosto de 2022 del Tribunal Tributario y Aduanero respecto de reclamación de liquidaciones respecto de los hechos materia de la acusación. 7.- Sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 20 de enero de 2023, relativa a la causa anterior. 8. Citación 22 del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 5 de septiembre de 2018, a la contribuyente Claudia Andrea Saldivia Vidal. 9.-



Certificado de deuda de la Tesorería General de la República (TGR) de 6 de febrero de 2024, respecto de la contribuyente Claudia Andrea Saldivia Vidal. 10.-Certificado de matrimonio de Carlos Andrés Muñoz Vásquez y Luz Matilde Reyes Cerda. 11.- Copia de cartolas BCI de la cuenta corriente 64068439, de la titular Claudia Andrea Saldivia Vidal, de enero de 2016 a marzo de 2018.

II.- PRUEBA TESTIMONIAL: consistentes en los asertos de: 1.- Damián Alexis Guerrero Vera. 2.-Oscar Adolfo Marín Guzmán. 3.-Viviana Gallardo Teca. 4.- Carlos Bustos Cáceres. 5. Cristián Cepeda Aced, comisario de la Policía de Investigaciones (PDI).

III.- PERICIAL: consistente en un metaperitaje contable evacuado por el perito Jaime González Tobar.

IV.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA: Diez (10) fotografías del negocio de la contribuyente doña Claudia Andrea Saldivia Vidal, que revelan mercaderías varias, y no están datadas.

OCTAVO: Hechos y circunstancias que se dieron por probados. De la prueba aportada por los intervinientes, analizadas conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, al tenor del artículo 297 del Código Procesal Penal, se han acreditado los siguientes hechos:

Que a lo menos desde el mes de diciembre de 2015; y en los meses de julio, agosto y diciembre de 2016; meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y; los meses de enero, febrero y marzo de 2018, Claudia Andrea Saldivia Vidal, como empresaria individual y contribuyente de primera categoría, y, José Manuel Ovando Pérez, administrador del negocio por mandato general y representante legal, los cuales ejecutaron maniobras fraudulentas, aumentando indebidamente el crédito fiscal IVA que Saldivia Vidal, tenía como contribuyente de Primera Categoría, en relación a las cantidades de Débito Fiscal IVA que debía enterar en arcas fiscales, y declararon en los respectivos Formularios N° 29, sobre Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos, un Crédito



Fiscal IVA mayor al que realmente había obtenido en los períodos comerciales señalados, amparándose en el registro y contabilización de 67 facturas falsas, emitidas por 7 proveedores, representativas de operaciones comerciales que no se realizaron y sobre las cuales no existen pruebas, ni antecedentes de su ejecución, provocando con ello un perjuicio al erario público, según proceso de recopilación de antecedentes efectuado por el Servicio de Impuestos Internos.

El detalle de las facturas ideológicamente falsas registradas y declaradas es el siguiente:

- 1. la factura electrónica 37 de fecha 28-07-2017 del proveedor Assistance Group SPA RUT 76.725.632-9, por un monto de \$3.570.000.-*
- 2. las facturas N° 111 de fecha 05-01-18; 116 de fecha 12-01-2018; 124 de fecha 19-01-2018; 242 de fecha 26-01-2018; 340 de fecha 03-02-2018; 345 de fecha 10-02-2018; 353 de 17-02-18; 385 de fecha 24-02-18; 613 de 03-03-18; 619 de 10-03-18; 626 de 17-03-18 y 775 de fecha 31-03-2018, todas del proveedor La Minga SPA RUT 76.390.048-7, cada uno de estos documentos contables por el monto de \$3.570.000.*
- 3. las facturas N° 136 de 04- 08-2017; 145 de 11-08-2017; 187 de 18-08-2017; 200 de 25-08-2017; 257 de 02-09-2017; 276 de 09-09-2017; 291 de 16-09-2017; 301 de 23-09-2017; 394 de 30-09-2017; 492 de 06-10-2017; 500 de 13-10-2017; 532 de 20-10-2017; 543 de 27-10-2017; 768 de 03-11-2017; 776 de 10-11-2017; 784 de 17-11- 2017; 853 de 24-11-2017; 860 de 30-11-2017; 964 de 02-12-2017; 970 de 09-12-2017; 975 de 16-12-2017; 1009 de 23-12-2017 y 1131 de 29-12-2017, todas del proveedor Group Ingenierías Lavín SPA RUT 76.333.986-6, cada uno de los documentos por un monto de \$3.570.000.*
- 4. La factura N° 443 de 26-12-2016 de la empresa Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada RUT 76.460.834-8, por un monto de \$17.850.000.*
- 5. Las facturas N° 749 de 28-04-2017; 730 de 21-04-2017; 723 de 14-04-2017; 708 de 07-04-2017; 924 de 06-05-2017; 936 de 27-05-2017; 943 de 31-*



05-2017; 927 de 13-05-2017; 932 de 20-05-2017, todas del proveedor Servicios Integrales ASIMEC RUT 76.641.266-1. Cada uno de los documentos por un monto de \$3.570.000.

6. Las facturas N° 451 de 30-06-2017; 445 de 23-06-2017; 439 de 09-06-2017; 434 de 09-06-2017; 608 de 07-07-2017; 613 de 14-07-2017; y 621 de 21-07-2017 del proveedor Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada RUT 76.375.671-8, siendo emitidas dichas facturas por un monto de \$3.570.000 cada una de ellas.

7. Las facturas N° 13195 de 01-12-2015; 13194 de 03-12-2015; 13210 de 07-12-2015; 13203 de 07-12-2015; 13212 de 07-12-2015; 13205 de 07-12-2015; 13216 de 10-12-2015; 13202 de 05-12-2015; 13220 de 10-12-2015; 13206 de 07-12-2015; 13211 de 07-12-2015; 13218 de 10-12-2015; 13207 de 07-12-2015 y 13209 de 07-12-2015, todas del proveedor Distribuidora Comercial Carsal Limitada RUT 76.438.661-2 que asciende a un total de \$84.058.378.

Asimismo ha quedado acreditado que Claudia Saldivia Vidal es dueña del 70% de la sociedad CARSAL Ltda, la cual ha declarado SIN MOVIMIENTOS desde el periodo de enero de 2016; ocurriendo que dicha sociedad emitió un documento por el cual reconoce adeudar a doña Claudia Saldivia la suma de \$144.340.360; mientras que dicha sociedad Carsal ha declarado en el periodo diciembre de 2015, un débito fiscal IVA inferior al que correspondía declarar.

Además de lo anterior, Saldivia Vidal y Ovando Pérez utilizaron en los periodos tributarios 2016, 2017 y 2018 dichos documentos para incrementar los costos de la contribuyente Claudia Saldivia Vidal, disminuyendo la base imponible del impuesto de primera categoría y en consecuencia el monto de impuesto declarado en el formulario 22 sobre declaración anual de impuesto a la renta en los referidos años.

Todo lo anterior generó un perjuicio fiscal de a lo menos: \$.46.615.117- (Cuarenta y seis millones seiscientos quince mil ciento diecisiete pesos) por



impuesto IVA; y de \$ 49.870.611 (Cuarenta y nueve millones ochocientos setenta mil seiscientos once pesos) por impuesto a la renta.

NOVENO: Valoración de los medios de prueba que fundamentan los hechos que se han tenido por acreditados. Las conclusiones fácticas señaladas en el considerando precedente, encuentran sustento en los testimonios y pruebas recibidos por estos sentenciadores en la audiencia de juicio, los cuales percibidos directamente por el Tribunal, han hilado razonadamente la impresión de veracidad y justificado, a nuestro entender lo que ya se adelantó al comunicar la decisión del Tribunal.

Asentaremos que los hechos descritos en el considerando precedente, tal y como se concluyó en el veredicto, constituyen, a juicio de estos magistrados, dos delitos de aquellos contemplados en nuestro código Tributario, y que para una mejor comprensión en el desarrollo de los medios de prueba que se han tenido en consideración para estimarlos acreditados, como asimismo de la participación, teniendo presente por configurado los tipos penales y que se encuentra contemplado en el artículo 97 N°4, primero, segundo y cuarto del Código Tributario.

Como primer punto relevante a determinar es la calidad de los sujetos activos que participan en la conducta descrita en el tipo penal y los periodos que se verificaron dichas conductas.

Que, para determinar que el período durante el cual ocurrieron los hechos, fue el comprendido entre los meses de diciembre de 2015; julio, agosto y diciembre de 2016; abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y; enero, febrero y marzo de 2018, se tuvo en consideración lo expuesto por el Fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos de la Unidad de Coyhaique **José Luis Vargas Chaura**, quien explicó haber efectuado “que se inició una verificación de facturas entre Concepción y Coyhaique con el contribuyente Eric Contreras, quien emitió facturas a Claudia Saldivia. Desde la unidad regional de Concepción Miguel Reyes se realizó la revisión, cuyo informe de verificación resultó negativo, indicando que las facturas revisadas no eran correctas.



De esta manera se le asigna para revisión a doña Claudia Saldivia Vidal fue asignada para realizar una revisión detallada. Luego, se procesaron los libros contables del contribuyente, incluyendo los libros electrónicos de compras y ventas, que deben reflejar transacciones reales. Al procesar estos libros, se detectaron irregularidades en los documentos relacionados con proveedores, algunos de los ellos tienen observaciones, cuales no declaraban impuestos o presentaban anotaciones negativas generando alertas para el Servicio. Estas observaciones dieron lugar a una auditoría para verificar la autenticidad de las facturas, los montos y el pago correspondiente, la mayoría de esos documentos eran por servicios de transportes.

Durante este proceso, varios proveedores de transporte fueron notificados para comprobar las declaraciones de los contribuyentes. Se les pidió que acreditaran el pago de las facturas, ya que la ley del IVA exige que el pago sea al emisor de la factura mediante métodos verificables como cheques nominativos. En algunos casos, se descubrió que los pagos no podían ser acreditados, lo que indicó la existencia de “contribuyentes agresivos”, irregulares o evasores. Consistiendo que un contribuyente da inicio a sus actividades con poco capital, emitiendo muchas facturas o documentos por montos superiores, sin hacer declaración o no pagando los impuestos, que es el caso de la sociedad La Minga SPA. La cual en 5 meses emitió facturas por 6.600 millones de pesos, la cual no pago ni declaro los impuestos mediante formulario 29.

Recuerda que se citó al contribuyente bajo la ley 18.320 con el objeto de acreditar el pago de las facturas y que aportara los antecedentes necesarios lo cual no se verifica siendo citado a una citación forzosa. Posteriormente se solicitó que proporcionara los antecedentes justificantes del transporte de mercadería desde Santiago a Coyhaique, ya que poseía una factura semanal y esto lo realizara mes a mes, de quienes eran sus proveedores, quienes eran los que traían y como fueron los pagos, por donde pasaron, control de aduanas, lo cual no se generó no pudiendo determinar la trazabilidad de las mercaderías, ni



menos se pudo determinar donde fue acopiado consecuencia de ello no se pudo generar el inventario, no existiendo consistencia de ello.

Un caso destacado fue el de la empresa Carsal, en el cual Claudia Saldivia utilizó facturas y no pagó los impuestos correspondientes. Que dentro del contexto, Saldivia Vidal es socia de Carsal con un 70% de propiedad, donde se realiza un reconocimiento de deuda por 144 millones y dación en pago por 122 millones de esta sociedad a Saldivia, por lo cual esta sociedad le vende mercaderías, que al ser revisada la contribuyente dicha deuda debe estar contabilizada de su caja o banco, lo cual no ocurre con lo cual no tiene una prueba de consistencia, a consecuencia de ello se genera un débito fiscal de 14 millones de pesos por concepto de venta, y que Carsal no paga el impuesto, pero que si la contribuyente declara ese crédito.

En torno al reconocimiento de deuda al que hace alusión el declarante se aportó por el acusador el documento entre la sociedad Carsal Ltda. y Claudia Andrea Saldivia Vidal, siendo representada la sociedad por José Manuel Ovando Pérez reconoce adeudar a la acusada Saldivia Vidal la suma única de \$144.340.360 teniendo la deuda como origen préstamos personales depositados a la cuenta corriente de la deudora desde el 4 de mayo de 2015 y hasta el 30 de septiembre de 2015, siendo pagadera la deuda en una sola cuota al 31 de marzo de 2016.

En tanto para establecer la dación en pago se acompañan dos documentos de fecha 7 de diciembre de 2015, en donde la distribuidora Carsal Ltda., representada por Ovando Pérez, entrega en dación en pago a doña Claudia Saldivia Vidal un enlace dedicado otorgado por la compañía Telefónica del Sur correspondiente a fibra óptica avaluado por las partes en la suma de \$300.000; un camión Mercedes Benz, año 1996 avaluado en \$8.000.000 y un furgón Fiat Fiorino avaluado por las partes en \$4.000.000.

Que en el caso de Ingenierías Lavín al revisar el correo electrónico que aparece en la factura no está registrado en el Nick Chile, los cuales emitieron por mil millones de pesos y fracción. Precisa que respecto de la sociedad Assistance Group SPA recibió una sola factura N° 37 que era de transporte de



mercaderías desde Santiago a Coyhaique y que fue aportada en dos veces a la contabilidad, el cual admite como error, pero lo que no se acreditó que realmente se haya realizado con el objeto del traslado de mercadería a Coyhaique, generando un crédito que no se paga y se rebaja del impuesto en el mes de agosto.

Por su parte la empresa Sustragro emitió una factura por 15 millones de pesos, donde se indica que se realizaron varios fletes, tampoco tuvieron la posibilidad de verificar la trazabilidad de la mercadería que supuestamente se trasladaba al interior de los camiones.

En el caso de la empresa ACIMET, pudo verificar que esta empresa no tenía lo necesario para contratar choferes, la compra de combustibles, mantención de maquinaria etc., por lo cual resulta llamativo como genera sus rentas y específicamente el servicio que se señala en la factura.

Que en el caso de la sociedad de transporte Catalán Salgado Ltda., la cual desde un tiempo dejó de pagar los impuestos emitiendo muchas facturas.

Relata que el impuesto de IVA tiene varias fases y sino se paga el impuesto se pierde la cadena, y el perjuicio fiscal es completo.

Precisa que en una declaración jurada Ovando señala que le pagaba A Carlos Muñoz, mediante transferencia a la cuenta de doña Matilde Reyes quien recibió un monto por concepto de IVA de 34 millones, pero ello no cuadraba con los pagos totales de IVA, refiriendo Ovando que el resto era pagado en efectivo a los choferes sin recordar nombres ni menos dejaba constancia de ello, lo que contraviene la normativa sobre el pago del impuesto sobre este punto. Desconociendo de las mercaderías que trajera el contribuyente desde Santiago, ya que no había constancia de ello, sin darle detalles de los productos, lo cual nunca aportó a la mercancía.

El contribuyente Ovando señala en su declaración que nunca cuestiona que Muñoz no fuera el representante o socio de las empresas que le prestan servicios.



Que ante la exhibición e incorporación del documento signado como factura electrónica 37 de Assistance Group SPA, giro de transportes arriendo de maquinarias RUT 76.725.632-9 Factura 37, a nombre de Saldivia Vidal, señala que es traslado de mercadería desde Santiago a Coyhaique, por un monto de \$3.000.000, impuesto a pagar \$570.000, total \$3.570.000, de fecha 28 de julio de 2017. Afirmando el declarante que fue el documento antes mencionado es el mismo que el contribuyente uso en su contabilidad. En el proceso de revisión que dio origen a esta causa, es lo que arroja como alerta el sistema pero de igual forma en citación el contribuyente lo hace llegar. Respecto del proveedor La Minga son 12 facturas que se reciben siendo varios periodos los que se usan.

En este mismo orden de ideas, el Ministerio Público incorpora las 12 facturas emitidas por el proveedor La Minga S.A. cuyo RUT es 76.390.048-7 cuyo giro es contratista agrícola, repuestos, corretaje , a nombre de Saldivia Vidal, desde la factura N° 111 de fecha 05-01-18; 116 de fecha 12-01-2018; 124 de fecha 19-01-2018; 242 de fecha 26-01-2018; 340 de fecha 03-02-2018; 345 de fecha 10-02-2018; 353 de 17-02-18; 385 de fecha 24-02-18; 613 de 03-03-18; 619 de 10-03-18; 626 de 17-03-18 y 775 de fecha 31-03-2018, todas con la glosa servicio de transporte de mercadería, y cada una de ellas por un monto neto de \$3.000.000 y un impuesto de \$570.000.

En lo tocante a las facturas emitidas por el proveedor Group Ingenierías Lavín SPA RUT 76.333.986-6, cuyo giro es obras ingeniera civil, transporte de carga, artículos de ferretería, a nombre de Saldivia Vidal corresponden a las siguientes facturas bajo los números 136 de 04- 08-2017; 145 de 11-08-2017; 187 de 18-08-2017; 200 de 25-08-2017; 257 de 02-09-2017; 276 de 09-09-2017; 291 de 16-09-2017; 301 de 23-09-2017; 394 de 30-09-2017; 492 de 06-10-2017; 500 de 13-10-2017; 532 de 20-10-2017; 543 de 27-10-2017; 768 de 03-11-2017; 776 de 10-11-2017; 784 de 17-11- 2017; 853 de 24-11-2017; 860 de 30-11-2017; 964 de 02-12-2017; 970 de 09-12-2017; 975 de 16-12-2017; 1009 de 23-12-2017 y 1131 de 29-12-2017, todas con la glosa de servicio de transporte de mercadería desde Santiago a Coyhaique, por un monto neto de \$3.000.000 y un impuesto de \$570.000, cada una de ellas.



En lo respecta a la empresa Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada RUT 76.460.834-8, cuyo giro es ventas de partes de piezas de vehículos y transporte, giro la factura 443 de 26-12-2016, a Claudia Saldivia Vidal, por concepto de fletes de traslado de mercadería de Santiago a Coyhaique, por 5 fletes por un monto neto de 15.000.000 y un impuesto de 2.850.000 pesos.

En lo pertinente a la exhibición e incorporación del proveedor Servicios Integrales ASIMEC RUT 76.641.266-1, emitió 9 facturas a Claudia Vidal Saldivia por concepto de traslado de mercaderías desde Santiago a Coyhaique, desde la factura 749 de 28-04-2017; 730 de 21-04-2017; 723 de 14-04-2017; 708 de 07-04-2017; 924 de 06-05-2017; 936 de 27-05-2017; 943 de 31-05-2017; 927 de 13-05-2017; 932 de 20-05-2017, por un monto neto de \$3.000.000 y un impuesto de \$570.000, cada una de ellas.

En este mismo orden de ideas, se exhibieron y fueron incorporadas las facturas de la Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada RUT 76.375.671-8, la cual emitió 7 facturas a Claudia Vidal Saldivia por concepto de traslado de mercaderías desde Santiago a Coyhaique, signadas bajos los números 451 de 30-06-2017; 445 de 23-06-2017; 439 de 09-06-2017; 434 de 09-06-2017; 608 de 07-07-2017; 613 de 14-07-2017; y 621 de 21-07-2017.

Finalmente en lo que respecta a la Distribuidora Comercial Carsal Limitada RUT 76.438.661-2, giro distribuidora de alimentos de fantasía la cual emitió las siguientes facturas a Claudia Saldivia Vidal, cédula número 14.097.900-7; 13195 de 01-12-2015; 13194 de 03-12-2015; 13210 de 10-12-2015; 13203 de 07-12-2015; 13212 de 10-12-2015; 13205 de 07-12-2015; 13216 de 10-12-2015; 13202 de 07-12-2015; 13206 de 10-12-2015; 13211 de 10-12-2015; 13207 de 10-12-2015 y 13209 de 10-12-2015, cuyo monto total en impuesto IVA asciende a \$13.287.319 pesos

Asevera el declarante que durante la auditoría, se descubrió que las transacciones y los pagos asociados no estaban debidamente contabilizados. Las revisiones adicionales revelaron inconsistencias en los registros de inventarios y



la trazabilidad de las mercancías, lo que impidió comprobar la veracidad de las transacciones.

Además, la auditoría detectó anomalías en las operaciones de otras empresas y proveedores, (refiriéndose a los nombrados) incluyendo la emisión de facturas por grandes montos sin el respaldo de actividades comerciales reales. Como también se corrobora la falta de pago de impuestos de IVA en los distintos proveedores con los cuales se relacionó la contribuyente, no obstante ello, hubo un pago de IVA de diciembre de 2015 de alrededor de 74 mil pesos, beneficiándose la Sra. Saldivia de ello, debiéndose haber pagado alrededor de 14 millones de pesos por lo que la no declaración de los mismos resultaron en pérdidas fiscales significativas.

En resumen, la fiscalización reveló numerosas irregularidades en las prácticas de emisión de facturas y pago de impuestos, lo que llevó a la aplicación de medidas correctivas y sanciones fiscales para garantizar el cumplimiento de la ley y la recaudación de los impuestos adeudados.

En el contexto de la fiscalización de Claudia Saldivia y las irregularidades detectadas en sus transacciones comerciales y declaraciones tributarias, se han mencionado una serie de hechos y procedimientos que destacan la complejidad del caso.

Precisa que se revisaron los Libros de Compra y Venta, pago de sueldo, honorarios, o cualquier gasto relacionado con la empresa. En el caso de las compras y ventas debían contener las facturas reales que correspondieran a transacciones efectivas. Los informes de verificación indicaron que había inconsistencias y que algunos proveedores no estaban pagando los impuestos correspondientes o presentaban anomalías como la falta de capital suficiente o la emisión de facturas excesivas.

Afirma que se pidieron evidencias a Claudia Saldivia sobre el transporte de mercancías desde Santiago a Coyhaique, no lográndose obtener una trazabilidad clara de las mercancías, y las respuestas proporcionadas no incluían pruebas adecuadas como guías de despacho o detalles específicos sobre la



logística de los transportes. Esto cuestionó la realidad de las operaciones comerciales.

Por otra parte doña Claudia Saldivia Vidal habría usado el crédito fiscal de IVA proveniente de las facturas cuestionadas, pero no logró acreditar el pago a los proveedores, lo que es un requisito para el uso legítimo de dicho crédito según la ley. En algunos casos, las facturas se registraban dos veces, generando un crédito indebido de IVA y disminuyendo la carga tributaria.

De esta manera Vargas Chaura menciona el informe de verificación de documentos tributarios que permite establecer más allá de toda duda razonable la calidad de contribuyente desde el año 2005, ya que se consigna a que Claudia Andrea Saldivia cédula nacional de identidad 14.097.900-7 reúne tal la calidad.

Indica que para poder emitir factura electrónica es necesario que tenga inicio de actividades y se debe desarrollar trámites en el SII. Precisa que la firma digital está a nombre del contribuyente o representante legal. Que el grupo de proveedores tenían inicio de actividades, pero las facturas son falsas ya que con las pruebas de consistencias que se realizaron no se pudieron acreditar la realidad de las transacciones y en este caso no se aportaron pasando a la etapa de liquidación de impuestos.

Aclara para el pago del impuesto de IVA se debe realizar mensualmente mediante el formulario 29 a mes vencido, el cual se hace a través de internet, ingresando el contribuyente a la web y ellos cargan la información de las declaraciones de carácter voluntario y auto llenado, se entrega una propuesta completa el formulario.

Por su parte en la incorporación de los formularios signados “declaración mensual y pago simultaneo formulario 29” explica Vargas Chaura, que la operación que se realizó en su momento fue revisar y analizar la cantidad de facturas recibidas y al revisar los libros pudieron establecer la cantidad de facturas que fueron falsas, y le restan del monto, luego en la liquidación de impuesto, se hizo un menor pago de impuesto.



Corrobora lo anterior, lo expuesto en la prueba documental consistente en los mencionados formularios de diciembre de 2015, la cual contiene una modificatoria con resolución ya que la presentado es de fecha 23 de enero de 2017; agosto y diciembre de 2016, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2017; enero, febrero y marzo de 2018, por los montos que allí se indican.

Respecto de la empresa Carsal se aporta documento signado como el formulario 29 en donde se indica que el total a pagar de impuesto en el mes de enero de 2016 es la cantidad de \$129.672 pesos, a contrario de los 14 millones que debía hacer y que no está en la mencionada declaración.

Relata que entre los activos de Carsal estaba la mercadería la cual fue comprado por Claudia Saldivia, por lo que la empresa no paga impuesto y cuando se usa el crédito fiscal, desde el punto de vista tributario se debe pagar, en los requerimientos que ellos como servicio lo solicitaron pero que el pago del impuesto no se verifico.

Si bien la normativa del DL de IVA, señala que las facturas deben pagarse a las personas que prestan el servicio, en caso, que sea un tercero con una factura falsa y el contribuyente acredita el pago del impuesto lo puede hacer, pero en este caso no se acreditó que las operaciones fueran reales por lo cual no da derecho a ese crédito fiscal, además afectando el impuesto a la renta que son gastos no acreditados, usando indebidamente los montos de los formularios 29 y 22.

En este mismo orden de ideas y para establecer que los proveedores tenían la calidad de contribuyente se aportó por el Ministerio Público del sistema integrado de cumplimiento tributario, los datos relevantes de los proveedores que mantenía la contribuyente Saldivia Vidal, como es Assistance Group SPA, La Minga SPA Group Ingenierías Lavín SPA; Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada, Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada; Servicios Integrales ASIMEC, distribuidora y comercial Carsal Ltda.



Concluye finalmente que se observó que muchas facturas no fueron acompañadas por pagos verificables, en algunos casos, los pagos se realizaron a través de terceros, como Matilde Reyes, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad de los documentos y la consistencia de las transacciones. Asimismo la ausencia de evidencia suficiente para respaldar las transacciones y los pagos resultó en la emisión de liquidaciones de impuestos. Se concluyó que Claudia Saldivia utilizó indebidamente créditos fiscales de IVA para reducir su carga tributaria. Además, los informes de verificación mencionaron la emisión de facturas por montos significativos sin el respaldo de transacciones comerciales reales.

Ante la exhibición del documento consistente en el formulario 22 de la letra i del querellante el testigo lo reconoce como tal, calificándolo como un impuesto de primera categoría, y que las facturas se usan como gastos con lo cual un documento falso afecta la base imponible del impuesto

Que en torno a las consultas de las Defensas de los acusados argumentó que no se probaron de manera efectiva las irregularidades en la emisión de las facturas, y que las pruebas presentadas por los fiscalizadores no eran concluyentes. Por otro lado, los representantes legales argumentaron que había un cumplimiento parcial de las obligaciones tributarias, pero que ciertas inconsistencias se debían a errores administrativos.

En efecto, existe un cúmulo de indicios y antecedentes que dan cuenta que el servicio de flete no se realizó, teniendo en cuenta que se trata de proveedores que no cuentan con registros de sus operaciones como es contrato de trabajo, gastos que incurre en producir la renta, rastros o huellas del traslado de la mercadería a Coyhaique (como podría ser guías de despacho, pago de peajes, facturas de empresas marítimas, entrada y salida al país, gastos de alimentación y comida de los choferes, nombres de estos, etc.) sumado a que la mayoría de los fletes durante el periodo de casi 3 años, siempre se cobró la misma cantidad de dinero; en tanto los acusados no demostraron en su contabilidad, facturas, inventarios, imágenes de la mercadería, etc., lo cual genera en este Tribunal el



convencimiento que existe diversos indicios que los servicios no se prestaron como lo aseguran los acusados.

De esta forma es concluyente que se presentan serias dudas sobre la veracidad de las operaciones comerciales de Claudia Saldivia, especialmente en lo relacionado con la legitimidad de las facturas emitidas y la trazabilidad de los bienes transportados. La falta de documentación de respaldo y la presencia de proveedores categorizados como "contribuyentes agresivos" refuerzan las sospechas de fraude tributario.

Corroborar estas ideas matrices, los asertos del funcionario policial **Rodrigo Alejandro Millán Salazar**, quien señal las diligencias correspondientes a julio de 2020, con el informe 826/2020. En la querella del SII se mencionan irregularidades relacionadas con facturas falsas. Se plasma la diligencia de notificar a José Manuel Ovando Pérez y Claudia Saldivia, ambos notificados. Ovando se presenta en las dependencias de Bridec y se acoge al derecho de guardar silencio. Saldivia indica que no puede presentarse debido al COVID-19.

Se identifican a los proveedores de Saldivia y Ovando, destacando ocho empresas proveedoras de las facturas: Assistance Group, Comercial La Minga Spa, Eric Contreras Tapia, Sustragro, Acimet, Transporte Salgado y Carsal. Se observa que siete de estas empresas están fuera de la región.

Se recibe nueva instrucción para continuar con las diligencias, incluyendo entrevistas a los acusados y la ubicación de socios y empresas. Se entrevista a Ovando, quien presta declaración previa lectura de sus derechos en presencia de su abogada. Se solicitan diligencias a unidades en distintas localidades del país: Osorno, Temuco, Santiago, Villarrica, Rancagua, Talagante, Peñaflor, Lautaro, entre otras.

Precisa que en la declaración de Ovando menciona que dentro de su negocio adquirió una propiedad con el objetivo de construir bodegas y distribuir mercaderías a sus locales comerciales. Reconoce que para traer mercaderías a la región, contactó a Carlos Andrés Muñoz Vásquez a través de internet, luego por



teléfono y correo electrónico. Se acordó que Muñoz transportaría las mercaderías y el pago se realizaría en dos partes: la primera a través de transferencias desde la cuenta corriente de Saldivia a la cuenta de Luz Matilde Reyes y la otra parte en efectivo. Precisa que Ovando no conocía personalmente a estas personas, ni a las empresas relacionadas, y los pagos eran directamente a Luz Reyes.

Plantea que se solicitó a la unidad de Talagante la entrevista con otra persona, Olave Valdés, quien también fue contactado por internet para colaborar en la construcción y ampliación de locales comerciales. Olave Valdés emitió facturas a nombre de Eric Contreras Tapia, con domicilio en Maipo y Talagante.

En el segundo informe, 75/2021, de enero de 2021, se solicita la declaración de Saldivia y que su abogada señala que por instrucción de su mandante se remita que la declaración de Ovando, quien tiene la administración y el manejo de la empresa es Ovando. La fiscalía recibe este informe junto con las solicitudes de las unidades policiales.

El tercer informe, de septiembre de 2021, incluye los resultados de las diligencias solicitadas y las declaraciones faltantes de Olave, Muñoz y Reyes, así como de las empresas mencionadas. Los resultados de las diligencias fueron negativos, ya que no se lograron ubicar las empresas registradas en los domicilios indicados en Equifax, muchas de estas empresas resultaron ser departamentos, oficinas virtuales y otros tipos de establecimientos que no fueron ubicados; las empresas mencionadas, como Carsal, vinculadas a Saldivia y Jorge Carmi, estaban relacionadas con giros de venta de abarrotes y otros negocios en Osorno.

En el caso de Talagante, se ubicó y se entrevistó a Muñoz y Reyes, quienes proporcionaron declaraciones escuetas. Muñoz mencionó que tenía muchos clientes, pero no aportó antecedentes relevantes. Reyes Cerda indicó que tenía una cuenta corriente, pero no ofreció más detalles.

Puntualiza que Ovando buscaba servicios de fletes por internet y que la persona que proporcionaba estos servicios era Muñoz, aunque a través de



distintas facturas. Los pagos se realizaban mediante transferencia a Luz Reyes Cerda desde la cuenta de Saldivia, y otra parte en efectivo a los camioneros, con formas de pago que variaban entre cheque y efectivo. Ovando proporcionó el número de la cuenta de Reyes. En las entrevistas realizadas a Muñoz y Reyes Cerda, no se encontraron vínculos claros con los proveedores.

No se pudo verificar la prestación de los servicios ni los costos asociados, lo que permite presumir que estas empresas se constituyeron con el propósito de defraudar al fisco. Solo se ubicó a Carsal en su domicilio; las demás empresas no fueron localizadas, ni Muñoz ni Cerda eran socios de estas sociedades.

Ovando no proporcionó nombres de choferes, patentes de camiones, facturas ni firmas de los choferes. La relación de confianza en estos pagos no estaba respaldada por la documentación requerida. Afirma que los comerciantes generalmente dejan un registro de los pagos realizados.

Carsal, según Ovando, fue adquirida por él para realizar negocios relacionados con Fabres y Carmi. Sin embargo, no tuvo éxito con la empresa y transfirió fondos de Saldivia a Carsal, lo que implicó facturas involucradas. Este traspaso de fondos se produjo en 2015 y el saldo de la deuda era superior a 100 millones de pesos. Las facturas relacionadas con este período abarcan desde 2015 hasta 2017 o 2018, y la maniobra consistía en disminuir el impuesto a la renta alegando una merma económica debido a la mala administración y negocios.

Argumenta el testigo que en la declaración de Luz Matilde Reyes Cerda menciona que los pagos de Ovando se realizaban regularmente mediante transferencias electrónicas. Los pagos de las facturas incluyeron adelantos mediante transferencias electrónicas a una cuenta a nombre de Reyes, según la solicitud de Muñoz. La unidad de Talagante, tras tomar declaración a Reyes, descubrió que su cuenta en Banco Santander está inactiva.

Se remiten respuestas de las unidades policiales, con instrucciones de ubicar y entrevistar a los proveedores de las facturas, así como a Ovando, Saldivia, Muñoz, Reyes y Olave.



Que en el caso de Claudia Saldivia no cabe duda que es un contribuyente que esta afecto al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, debiendo para ello tenerse presente, lo dispuesto en el artículo 3° del DL 825 de 1974 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que resulta ser más específico que el artículo 8 N°5 del Código Tributario. En este sentido el referido artículo 3° dispone que “son contribuyentes, para los efectos de esta ley, las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que realicen ventas, que presten servicios o efectúen cualquier otra operación gravada con los impuestos establecidos en ella.”

En torno a la calidad de Ovando Pérez, si bien este acusado no mantenía un inicio de actividades en el SII a su nombre, si tenía la calidad de contribuyente afecto al Impuesto a las ventas y servicios, ya que asumió la calidad de mandatario de Saldivia Vidal como persona natural y también como mandatario de la sociedad Carsal. Ltda., donde mantenía amplias facultades según el mandato aportado de fecha 17 de agosto de 2017.

Incluso en su declaración Ovando Pérez reconoce desde antes de los periodos cuestionados que estaría actuando en representación de Saldivia Vidal por los acusadores.

Consecuencia de lo anterior, para el caso de Ovando Pérez el Código Tributario en su artículo 8 N° 5 señala que “Para los fines del presente Código y demás leyes tributarias, salvo que de sus textos se desprenda un significado diverso, se entenderá:... N° 5 Por "contribuyente", las personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.”

Habiendo resultado justificado, más allá de toda duda razonable, conforme se estableciera que tanto el representante legal, Ovando Pérez, como, quien es el contribuyente, ambos acusados eran responsables del giro y pago del Impuesto IVA, por las calidades que cada uno tenía dentro de la obligación tributaria.



De esta manera se rechaza la alegación de la defensa de Ovando Pérez de participación en cuanto que su representado no tiene participación en los hechos que se le imputan por carecer de dicha calidad.

Ha sido relevante para establecer el perjuicio fiscal el peritaje contable de doña **Carmen Opazo Valdés**, funcionaria de la PDI, la cual mediante los antecedentes proporcionados como los “03 archivadores con fotocopias simples del Informe de Recopilación de Antecedentes N O 12, de fecha 05.MAR.019, del Dpto. Regional del Fiscalización del SII. Aysén y su Cuaderno de Pruebas” reviso aquello relevante para la resolución de los proveedores que se indican en la acusación como los antecedentes contables de doña Claudia Saldivia Vidal, Assistance Group, Group Ingenierías Lavín SPA, Servicios Integrales Asimec SPA., Sociedad de transporte Catalán y Salgado, Ltda., Distribuidora comercial Carsal Ltda., Sustratos agrícolas Sustagro, Ltda., comercial la Minga SPA. Concluyendo que Claudia Saldivia Vidal, tributa en primera categoría con renta efectiva mediante contabilidad completa, lo cual es concordante con la demás prueba que se ha analizado hasta ahora. Asimismo establece que son 8 los proveedores que emitían facturas falsas, debemos hacer presente que para los efectos de la presente causa son 7 a los cuales hemos hecho alusión, en el periodo de tiempo del año 2015 a 2018 utilizando indebidamente el monto por la contribuyente en el caso del impuesto del IVA de \$70.787.456, monto del cual debemos señalar que es menor de acuerdo a las operaciones que hemos realizado como Tribunal para determinar el perjuicio fiscal. Coincidiendo con la profesional que el uso del crédito fiscal mediante factura falsa, hizo disminuir la base imponible para el cálculo de su impuesto a la renta, resultando inferior al que debía enterar en arcas fiscales para los periodos 2016 a 2018.

En este mismo orden de ideas, el informe pericial emitido por la misma perito contable de fecha 24 de julio de 2023, viene en complementar y rectificar información en torno a los otros proveedores mencionados como Carlos Muñoz Vásquez, Sustratos Agrícolas Sustragro Cía. Ltda. y Servicio integrales Asimec,

Asevera la perito que se tuvo a la vista los libros de compraventa de la imputada, Claudia Saldivia Vidal, correspondiente a los periodos 2017 y 2018.



Que respecto de Carlos Muñoz Vásquez, no fue ubicado en los libros de compra-venta de la imputada, Claudia Saldivia Vidal, tenidos a la vista, lo anterior, por cuanto, Muñoz Vásquez, no emitió facturas a su nombre de Saldivia Vidal. Indica que la gestión de Muñoz Vásquez consistió, según antecedentes de la investigación, en proporcionar facturas falsas de otros proveedores a la imputada.

Respecto de la factura N° 0443 de fecha 26.12.2016, emitida por "Sustratos Agrícolas Sustratos Cía. Ltda." a la Imputada, no fue ubicada en los libros de compra-venta de ésta, tenidos a la vista para la realización de la presente pericia.

Con respecto a Servicios Integrales ASIMEC Spa, quien emitió las facturas N° 749-730-723-708-924-936-943-927 y 932 a Claudia Saldivia Vidal, en los meses de abril y mayo del año 2017, no fueron encontradas o ubicadas en los libros de compra-venta de la Imputada, tenidos a la vista para el presente informe.

En respuesta a la interrogante en relación a Informe Pericial Contable N004/023 de este Lacrim Regional Coyhaique, el cual señala se adjunta al presente oficio las liquidaciones 43 a 63 para que usted se pronuncie si la nulidad de tales liquidaciones tiene incidencia o no en la determinación del perjuicio fiscal.

Efectivamente, existe un perjuicio fiscal, al ser anuladas por el Tribunal Tributario y Aduanero las liquidaciones N° 43 a la N° 059, monto que asciende a \$ 59.684.927, monto que corresponde a impuestos IVA por los períodos tributarios comprendidos entre diciembre 2015 y marzo del 2018. Dicho monto, corresponde a valor neto de los impuestos IVA determinados por el Servicio de Impuestos Internos a la contribuyente Claudia Saldivia Vidal.

Que si bien existe una diferencia entre los montos iniciales de la pericia de 23 de abril de 2020, en caso alguno dicha circunstancia permite jurídicamente tener por no configurado los tipos penales por los cuales los acusadores presentaron el requerimiento.



También es relevante la prueba documental que nos permite establecer que no solo se encuentran las facturas mencionadas anteriormente, sino también cabe precisar los formularios 29 sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos como es Assistance Group SPA, del periodo 07/2017 a 12/2017 con un total a pagar en esos periodos de \$517.897; por su parte la empresa La Minga SPA en el mencionado formulario de fecha 29 de diciembre de 2017 y los meses de enero y marzo de 2018, sin pago de impuesto; por su parte la sociedad Group Ingenierías Lavín SPA en el mencionado formulario solo pago impuesto en el mes de septiembre por un monto de \$479.259, sin que los meses de agosto, octubre y diciembre del año 2017 estuviera obligado al pago de impuesto; en tanto la Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada en la declaración del mes de junio de 2017 declaro como pago del impuesto \$50.265 y en el mes de julio de ese año 116.485; en tanto Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada en el mencionado formulario en el mes de diciembre de 2016 declaro \$536.734; en el caso de Servicios Integrales ASIMEC en abril de 2017 estuvo obligado al pago de \$860.765 y mayo de 2017 declaro \$130.071.

En lo que respecta a Comercial Carsal en donde Saldivia Vidal tiene la representación legal como socia, se aportan antecedentes relevantes para estimar el dolo con el cual actuó la acusada, como es el documento signado como liquidaciones desde las 23 a la 31 de los periodos tributarios enero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre, diciembre todos del año 2015 por IVA DL. 825/74 y abril de 2016 por impuesto único art.21. inc.1, por un monto total de los impuestos de \$154.365.413, los cuales reajustados, sumado los intereses y las multas ascienden a \$335.092.853. Documento suscrito por el fiscalizador Miguel Reyes Garrido y Roberto Herrera Gamboa jefe del departamento de fiscalización XI dirección regional, Coyhaique. Asimismo en los giros de comprobante de impuestos y multas folios, 2460219, 2460223, 2460219, 2460227, 2460237, 2460247, 24602512460255, 2460261 cuyo representante legal es Jorge Felipe Carmi Rojas.

Que en este mismo orden de ideas, siendo concordante y armónico con la demás prueba de cargo, para acreditar el perjuicio fiscal sobre el impuesto a la



renta el formulario 22 de los años 2016 a 2018, en donde se individualiza de manera detalla a Claudia Saldivia Vidal, recibiendo como remanente de crédito para el año 2016 la suma de \$39.957.995; en el periodo 2017 debe pagar como impuesto la suma de \$98.053; en el año tributario del año 2018, un remanente de crédito la suma de \$28.294.802 y finalmente en el periodo tributario 2019 un remanente de crédito de 20.553.682 pesos debiendo pagar la suma de \$196.132 pesos.

Corroborar las conclusiones anteriores, los libros diarios de la contribuyente Claudia Andrea Saldivia Vidal, cedula nacional de identidad 14 identificados con los folios 427 del periodo 01/01/2015 a 31/12/2015, el cual señala los comprobantes de traspaso de fecha 31 de diciembre de 2015; folio 429 de la misma fecha por un monto de \$155.600.000 de pesos; folio 620 del periodo de 01/01/2016 a 31/12/2016 con anotación de fecha 31/12/2016 por un monto de 198.337.289; folio 607 con comprobante de egreso N° 10 de fecha 31 de agosto de 2016 por la suma de \$155.600.700.

Contribuye a formar convicción la prueba documental consistente en el Copia de libro de ventas electrónicas dentro de los periodos materia de la acusación, y copias de facturas emitidas por José Ovando Pérez, en los registros de los proveedores cuestionados los cuales son concordantes en las fechas y los montos de las facturas cuestionadas.

DECIMO: Pruebas de las defensas. Que, las Defensas de ambos acusados, a fin de sustentar sus respectivas teorías del caso, presentaron prueba testimonial, las que no aportaron antecedentes suficientes para acreditar la existencia de los servicios de transporte que daban cuenta las facturas que fueron la base de las acusaciones deducidas en su contra, y prueba pericial, la que no tuvo la entidad suficiente para desvirtuar el contenido y conclusiones del informe contable 09/2020 elaborado por la contadora auditora doña Carmen Opazo Valdés.

En efecto, en cuanto a la prueba testimonial, el ente acusador presentó en primer lugar al subcomisario de la PDI, **Carlos Alejandro Bustos Cáceres**, quien declaró que trabaja en la unidad de Talagante; que en el mes de agosto de



2021, le solicitaron entrevistar a tres personas, de las cuales lograron contactar a dos; la primera de ellas se llamaba Carlos Muñoz Vásquez, quien una vez que se le expusieron los antecedentes, indicó que carecía de mayor información y que como contaba de muchos clientes, necesitaba poder interiorizarse con los antecedentes de la carpeta y declarar en otra oportunidad; ese mismo día presencié la declaración de Luz Reyes Cerda, quien una vez que se le expusieron los antecedentes, indicó que desconocía a las personas imputadas, y cualquier otra información; respecto a una cuenta suya del Banco Santander, indicó que la mantenía inactiva y no recordaba el número de cuenta; además refirió que no emitía facturas, por lo que desconocía todo tipo de antecedentes de lo que se le estaba consultando; a Carlos Muñoz Vásquez se le preguntó de acuerdo de la información que le proporcionaron; y en relación a Luz indicó que tenía inactiva la cuenta del Santander; cuando llegan requerimientos de otras unidades, les acompañan la querrela o denuncia, y conforme al relato que aparece en dichos documentos, se hacen las preguntas, y Luz indicó que desconocía de cualquier tipo de antecedentes respecto de las personas que se mencionaban; no recordó desde cuándo tenía inactiva esa cuenta; no tuvo problemas para ubicar a esas personas; no recibió otras instrucciones para volver a ubicar a esas personas.

Contraexaminado por el Ministerio Público, agregó que no recuerda los nombres de los imputados, pero que eran investigadas por un delito tributario relacionado con facturas; le remitieron los nombres de las personas investigadas; Carlos Muñoz Vásquez se individualizó como comerciante, no transportista; Luz Matilde Cerda indicó ser ingeniera, y que no tenía conocimiento de las personas que le mencionó; además, esta señora no mencionó que trabajaba con el señor Muñoz y que no emite facturas; el señor Muñoz tampoco indicó que emitiera facturas.

Aclaró que les preguntó a las personas si emitían facturas, la señora Luz indicó que no emitía facturas y en el caso de Carlos Muñoz no recuerda si se le preguntó; a las personas les indicó que los clientes eran de Coyhaique.



En el mismo sentido, llamó a estrados al Comisario de la PDI, **Cristian Patricio Cepeda Aced**, quien refirió que trabaja en la unidad de Talagante; en el mes de abril de 2021, la BRIDEC de Coyhaique, les solicitó tomar declaración a 3 testigos, por lo que concurrieron a sus domicilios, logrando ubicar a dos de ellos; uno de los testigos tenía domicilio en Isla de Maipo y uno de sus apellidos era Olave; además se logró ubicar a testigos de la comuna de El Monte, los que fueron citados a la unidad policial; el primero se llamaba Carlos Muñoz, quien señaló que no tenía conocimiento acabado de las consultas que le hacían, y que iba a declarar cuando tenga los antecedentes para poder expresar con conocimiento lo que se le consulta; además se entrevistaron con Paz, quien respecto de una cuenta que se le consultó, del Banco Santander, indicó que la mantenía inactiva, y que no tenía conocimiento si tenía transacciones, y que no conocía a las personas que se le estaba preguntando; no sabe si tenían alguna relación esas personas, pero por lo que recuerda compartían el mismo domicilio; a Carlos Muñoz le consultaron relacionado con el documento adjunto que le remitieron, cuyos detalles no recuerda, pero indicaba imputados y movimiento de cuentas y facturación; esas personas comparten el mismo domicilio; no recuerda si le preguntaron por sus actividades comerciales, solo le preguntaron por los documentos adjuntos; no recuerda que decían tales documentos.

Agregó que fue complejo ubicarlos, ya que recibieron los antecedentes en abril y los contactaron en agosto; acudían a sus domicilios y se encontraban cerrados; el tercer testigo no lo contactaron pues los vecinos dijeron que no vivían en el sector; los dos testigos que contactaron acudieron el mismo día, pero en distintos horarios; posteriormente no tomó conocimiento de otro requerimiento de la unidad especializada, pero no podría asegurar si llegó a otra unidad.

Relata que la unidad que le envió los antecedentes fue la brigada de delitos económicos, por delitos tributarios, por emisión de facturas falsas; ambas personas tenían el mismo domicilio; Carlos Muñoz Vásquez refirió ser comerciante, no indicó ser transportista; no recuerda quiénes eran las personas investigadas, pero sí que eran de Coyhaique; no recuerda si a Carlos Muñoz le



dijeron que las personas investigadas eran de Coyhaique, pero sí que le mencionó a las personas investigadas por la Bridec; la segunda testigo era mujer, su nombre era Luz Matilde Reyes Cerda; ella refirió ser ingeniera; le mencionó que no tenía conocimiento de las personas y que tenía su cuenta cerrada; no recuerda si Carlos Muñoz señaló que no emitía facturas; Luz Matilde Reyes Cerda no indicó que trabajaba con Muñoz.

De esta forma, después del análisis de las dos declaraciones anteriores, solamente se pudo constatar que su importancia radicó en que se entrevistaron con dos personas cuyos nombres surgieron en el transcurso de la investigación y durante la audiencia de juicio oral, a partir de antecedentes aportados por los propios acusados, que los vinculaban con la emisión de las facturas cuestionadas y su pago, a saber, Carlos Muñoz Vásquez y Luz Matilde Cerda, quienes no les ratificaron la versión de los encartados, señalaron desconocer mayores antecedentes relacionados con las facturas ni con los acusados, e incluso el primero de ellos, indicó ser comerciante y no transportista, lo que es contrario al giro vinculado a los documentos cuestionados, y la segunda señaló que la cuenta corriente – que al tenor de la tesis de las Defensas estaría vinculada a los pagos de las facturas- estaba inactiva.

Adicionalmente, presentaron a la testigo **Viviana del Carmen Gallardo Teca**, contador auditor, quien declaró que el año 2016, se le solicitó hacer una revisión de la empresa Carsal Ltda., a petición de la nueva administradora contratada por la empresa, la señora “Vicky Latanzi”(sic); ella había encontrado una serie de irregularidades en términos de control de inventarios, por lo que solicitó al propietario una revisión del estado de situación; se le solicitó revisar las cuentas por pagar y cobrar, pues la empresa estaba en estado de insolvencia e incapacidad de pagos; ella trabajó entre septiembre y diciembre de 2016, revisando los antecedentes a disposición; para determinar las cuentas por cobrar, revisó las ventas, desde el inicio, que era el año anterior, donde habían tenido muy poco movimiento, pues estaba concentrado en el año 2015; revisó desde enero a septiembre de 2015, y se detectaron una serie de irregularidades, errores administrativos, errores en los registros de ventas, en los registros de compras,



no habían conciliaciones bancarias, en resumidas cuentas fue imposible determinar el monto o saldo de las cuentas por cobrar que habían a la fecha; por otro lado, en las cuentas por pagar, la situación era muy similar, no había control de inventarios, no había reglamento ni control interno de ninguna naturaleza, había una administración única que la ejercía en ese entonces Jorge Carmi, quien determinaba toda la situación, permiso, por lo que había muchas irregularidades; se intentó hacer conciliación bancaria, se revisaron las cartolas, pero mucha de la información era imposible determinar el origen de los movimientos, pues no todos venían identificados desde el banco; se intentó aclarar esas situaciones y, entre las cosas importantes, se descubrieron movimientos desde las cuentas desde los socios, administrador, de su cuenta personal, a la cuenta de la empresa; luego había reintegros, desde la cuenta de la empresa a la cuenta de los socios; se intentó analizar eso, se aclararon varios de los movimientos, pero varios quedaron inconclusos ante la falta de información; los administrativos eran nuevos, por lo que tampoco conocían cabalmente la historia de las situaciones, ellos tenían escaso manejo de cómo llevar los registros, no habían comprobantes de ingresos ni de egresos, por lo tanto ellos hacían sus registros, en un sistema computacional, de acuerdo al control de inventarios; pero la nueva administradora había detectado que el control de inventarios distaba a muchas luces del inventario físico que se veía en bodega; por lo que cuando llegó en septiembre ella ya había comenzado un conteo físico; había en bodega personal trabajando en hacer un inventario físico de esas mercaderías; se enteró que se detectaron mercaderías vencidas, había mucho reclamo de los repartos de los clientes, quienes devolvían mercaderías porque habían llegado o vencidas, o a puertas de vencer; la administradora les decía que había falta de control; desconoce si se valorizó ni su valor, pero sí sabe, pues participó de ese proceso, que al final de año, y ante la pérdida de uno de los principales proveedores, que era la cervecera, hizo decaer abruptamente las ventas, y la empresa decidió no seguir con el giro, y empezó por darle término a los contratos de trabajo, comenzando por los vendedores, lo que se hizo en el mes de diciembre, ya no había vendedores para distribuir los productos; ante eso, don José le comentó que había encontrado una solución para deshacerse del



inventario que quedaba en bodega, que era dárselo en pago a la socia, a quien se le debía una cantidad importante de dinero, quien había aceptado esa dación en pago, como parte o abono a la deuda; además la empresa tenía que entregar la bodega en diciembre, y ella vio que se sacaron muchos pallets de mercaderías, estructuras y cosas viejas que ya no servían se llevaron a basureros; ella da fe que esas mercaderías estaban en bodega y estaban destinadas a entregárselas a Claudia Saldivia; en la auditoría que hizo se determinó que la deuda que Carsal tenía hacia doña Claudia era por traspasos que habían recibido en la cuenta de Carsal, por parte de doña Claudia, rebajado las devoluciones, quedando un saldo pendiente, que se estimó que era la deuda que Carsal tenía con ella, que según recuerda eran aproximadamente cien millones; no sabe si la valorización del inventario alcanzó para cubrir la deuda o quedó algo pendiente; los traspasos y devoluciones los contabilizó en la cartola banco de la empresa Carsal.

A las consultas del Ministerio Público, señala que empezó a trabajar en septiembre de 2015; la deuda de la cuenta por pagar a Claudia Saldivia, según el balance que se hizo en diciembre, bordeaba los 100 millones; no recuerda la cifra de ciento cuarenta y tantos millones que se menciona en el juicio; a fines de 2015 Carsal le entregó esa mercadería a Claudia Saldivia, y el pago por esa mercadería, es el dinero que ya antes se había inyectado en la empresas, y que Carsal le debía a Claudia Saldivia; en términos contables esa operación es similar a una venta; esta operación genera IVA, un debito que no sabe si fue pagado por Carsal; las mercaderías compradas debieron generar un crédito a Claudia Saldivia; desconoce si hizo uso del crédito para rebajar el IVA; no sabe el número de facturas pues ella hizo una auditoria; la operación de venta de Carsal debió generar un débito IVA que debió pagarse, y la compra un crédito IVA que ella podía imputar a sus impuestos.

A la interrogantes de los querellantes, indica que no sabe quien tuvo la ideas de la dación en pago, a ella se la comentó José Ovando; sabe que Carsal tenía un déficit serio de caja, en las cuentas por pagar estaba registrada la cuenta de Cervecería, que estaba pendiente, había proveedores que al 31 de diciembre todavía estaban pendientes de pago, se estaba regularizando el tema con los



trabajadores, no había entradas; no sabe si había saldo para pagar con el pago de los impuestos; la empresa Carsal estaba en insolvencia por los flujos de caja; era una situación de insolvencia práctica; esa situación ni nada amerita dejar de pagar los impuestos; pero se puede declarar y pagar posteriormente; no sabe si se declararon los impuestos.

A las preguntas aclaratorias del Tribunal, indica que ella sólo hizo una auditoría en la que determinó la insolvencia de la empresa; no hizo la operación de traspaso de la mercadería; sólo revisó el período anterior al cambio de administración, que fue de enero a septiembre, y esas operaciones entiende que se hicieron en diciembre; la empresa en ese tiempo tenía contador, pero había sido contratado por la empresa anterior; el saldo de la diferencia entre los traspasos era de 100 millones; no sabe en cuanto se valorizó la mercadería.

Esta testigo, si bien entregó un relato consistente y detallado, lo cierto es que no aportó antecedentes gravitantes para la tesis de las Defensas, pues todo el desorden administrativo y contable que constató entre septiembre y diciembre de 2016, que decantó en una eventual insolvencia de pago, si bien puede explicar la deuda que la Distribuidora Comercial Carsal Limitada tenía con la empresa Cervecerías Chile, y que habría precipitado una serie de eventos que terminaron con el cese de las actividades de esta última sociedad, tampoco aportó antecedentes que acreditaran la efectividad de las operaciones cuestionadas que sustentaban las facturas descritas en la acusación, ni mucho menos el pago del IVA que generaron, o el uso indebido del crédito fiscal.

En cuarto lugar, compareció el testigo **Óscar Adolfo Marín Guzmán**, técnico administrador de empresas gastronómicas, quien declaró que trabajó por 8 años junto a José Ovando y doña Claudia Saldivia; cuando llegó al a región el 2015 trabajo en Distribuidora Carsal, de propiedad de Jorge Carmi y Claudia Saldivia, ubicada en recta Foitzick, km 6, era bastante grande y prometedora, tenía muchos proveedores y mercaderías, funcionaba en una sala de 700 a 800 metros cuadrados, con 4000 a 5000 cajas, era una distribuidora grande; fueron diversos los trabajos que realizó, desde bodega al área administrativa; fue ahí cuando empezó a darse cuenta de varios hechos irregulares, respecto al manejo



de adquisiciones principalmente; Carsal era grande pero desordenada en el tema de las adquisiciones; tenía 8 o 9 proveedores importantes, estuvo trabajando 8 a 10 meses en la distribuidora, hasta que se vino un problema de pago con un distribuidor, que hizo que la operación de la distribuidora fuera disminuyendo, pues se debía a Cervecerías Chile entre 200 a 300 millones, lo que hizo cesar funciones o parar paulatinamente, pues deberle a un proveedor esa cantidad es bastante irregular; se descargaban 3 o 4 ramplas a la semana, ingresaban 6.000 cajas de cerveza sólo al a bodega, después de eso la empresa tuvo que empezar a disminuir su operación, recuperar créditos que estaban en el aire, era todo muy laxo, falta de control, los créditos se registraban en Excel que los podía manipular cualquier persona; no se sabía cuánta mercadería había en la bodega ni las fechas de caducidad, él ingresó como operario y el primer día se dio cuenta que había 20 a 25 cajas que estaban vencidas; el señor Carmi era el encargado de la empresa, se lo dejó claro don José Ovando cuando llegó; era en ese minuto dueño y administrador, eras los ojos de la distribuidora; en diciembre de 2015 no hubo más distribuidora, él se va a trabajar con José Ovando a Comercial Valle Patagonia, ubicada en Km 8 o 9, callejón El Salto Chico, donde él continuó trabajando en distribución, que iba ser de Carsal, y hoy es el centro de operaciones de los Almacenes San José.

Acto seguido, se le exhibe otros medios de prueba 1, apreciando: 5, corresponde a la bodega distribuidora Carsal, muy parecido a lo que vio cuando llegó, sin identificación de fechas se ve el volumen constante de mercaderías, se ven 3 o 4 de cerveza; 6, cerveza que vendía Carsal, que era distribuía cerveza de Cervecería Chile, y adquiría cerveza a Cervecería Chile, pero no se hizo una separación de la mercadería; 7, bodega de Carsal, oficina café en la esquina, señala la oficina; 8, bodegas de Carsal, no sabe su tiene fecha las bodegas de Carsal; apilado que va primero y después; Jorge Carmi, era el socio y dueño, gerente general al momento que llegó; 10, es el mismo señor Carmi, se ve cómo está de llena la bodega, era mucha mercadería y proveedores, como CMPC, se observa caótico y el alto nivel de compra y venta. Se veía mucha mercadería.



Así estaba la bodega en septiembre, con las misma mercaderías que se observa, por entremedio debiesen ver pallet de comida de perro, que se recibe a lo amigo, eran practicas inentendibles en manera comercial, era tanto impulsivo las compras; la bodega debió haber estado así cuando ceso en sus funciones; entiende que las mercaderías que estaban dentro de la bodega Carsal reconoce deuda con Saldivia y esta mercadería fue facturada al Rut de Claudia Saldivia y trasladada a los almacenes San José; se reconoció la deuda por parte de un socio y se facturó a nombre de Claudia Saldivia; fácilmente puede ser lo que se observa en la foto 10; se facturó y trasladó a los centros de acopio del Almacén San José, en KM 7, camino a Balmaceda, en el callejón El Salto Chico; ya que podría haber llenado bastante 3 salas fácilmente; cuando la distribuidora Carsal dejó de operar, don José Ovando quedó trabajando con una marca, Everscrip, desde el 2015 hasta el día de hoy y ellos se trasladaron a las bodegas, ocupando él un cargo de jefe, operando 24/7 en ese sector, donde llegaban los camiones, con papas fritas y otros de Santiago y otras regiones; su oficina tenía muy buena vista, desde ella se observaba todo lo que entraba, además estaba en su oficina el control de las cámaras.

Se le exhiben otras imágenes: 1 y 2, bodegón del centro distribución de San José, en El Salto Chico, primera bodega donde llegaron a operar cuando dejó de funcionar Carsal; en El Salto Chico ese espacio es mayor, les permitió un poco más ordenadas e identificadas la mercadería; 3, patio del centro de distribución de El Salto Chico, se ven camiones de la empresa, el andén, hay dos bodegas en ese sitio una parte del patio; 4, es la segunda bodega dentro del centro de distribución, en este lugar opera Everscrip, cuando llegaron esta bodega estaba en construcción; se ve la ventana de su oficina.

Sabe que se facturaron las mercaderías a nombre de Claudia Saldivia, pues él fue quien las facturó, él contó la mercadería que había y quien realizó las facturas de esa mercadería; llegó a esos valores, primero se hizo un inventario para ver lo que estaba utilizable, y se facturó a nombre de Claudia Saldivia a precio de costo, el impuesto de dicho producto, más el IVA; se hizo con el precio de compra; un RP es un programa que podría ayudar a una distribuidora



el control de proveedores, ventas e inventario; en cuanto a la contabilidad de Carsal, la llevaba Jorge Carmi con su contador; después del problema con el proveedor, se cambió de contador, no sabe su nombre; durante el primer mes después que vino Cervecería, fue determinar por qué no cuadraba la cantidad de cervezas que se vendían a diario; recuperar los créditos blandos para que la plata retornara a la empresa; dentro de la operación por ejemplo salía un reparto, al llevarlo a la persona, no tenía dinero, le dejaban el producto y después lo cobraban, dejando la palabra crédito o CR a mano; los créditos se registraban en una plantilla de Excel sin seguro ni nada, que cualquier persona podía manipular; cuando ingresó al área administrativa, se pretendió ordenar la planilla de crédito.

A las consultas del Ministerio Público, indica que trabajó para Carsal 8 o 9 meses, desde febrero de 2015, y la distribuidora cesó sus actividades en diciembre de ese año; trabajó 3 a 4 meses en bodega y luego pasó al área administrativa; nunca trabajó para Claudia Saldivia; desde el 2015 trabajó para José Ovando en Distribuidora Valle Patagonia, desde diciembre de 2015, hasta febrero de 2023; el dueño de esa empresa es José Ovando; se le exhibe la foto 3, se ve el patio del centro de distribución de los Almacenes San José; el cual tiene 2 bodegas y la segunda bodega se ve al fondo, de manera transversal a la bodega más grande; la fecha es 26 de octubre de 2023; la fotografía 5 en adelante no la tomó él y no se hace mención al año; en el período que trabajó con Carsal no sabe si tuvo término de giro formal; en diciembre de 2015, Carsal facturó mercadería a Claudia Saldivia, corresponde a una venta; que se imputó a una deuda previa; Carsal podría haber vendido esa mercadería a terceros, pero no tenía vendedores; no sabe si Carsal pagó el IVA por los productos que traspasó a Claudia Saldivia; no sabe si Claudia Saldivia adquirió un crédito IVA por haber comprado esos productos; él no estaba a cargo del pago de la factura; José Ovando representa a Pepsico; 2016 a 2018, José Ovando tenía entre sus productos a Pepsico; ellos no tenían que pagar un camión por los productos de Pepsico, el precio del producto era puesto en andén; Everscrip tiene papas fritas, snack, comida saludable y otro tipo de galletas; Carsal no trabajaba fruta; cuando él trabajó en la bodega de Valle Patagonia no había fruta; en la bodega



de San José, si bien no trabaja su puesto de trabajo le permitía circular por ambas bodegas; la bodega de José Ovando le vende a Almacenes San José; entre 2016 a 2018 José Ovando IRL le vendía Claudia Saldivia; en esos años, cuando le vende esos productos, a los clientes de Coyhaique no tenían establecido flete, pero sí a los de afuera de Coyhaique; Claudia Saldivia era cliente de Coyhaique.

Por su parte al Querellante, les señala que entre 2015 a 2018 trabajaba como jefe de bodega, recibía las mercaderías y recibía el transporte; cada transporte cobra diferente atendido “el sin fin” de ítems que tienen de acuerdo al servicio que presta; todos los fletes tienen un costo diferente; a su vista Jorge Carmi y Claudia eran los dueños; a él lo llamó José Ovando y Valle Patagonia; él emite las facturas de Carsal a Claudia Saldivia, para emitir las facturas no hay que ingresar al SII, pues están trabajando con un RP, que ya tiene cargado el certificado digital, y sólo hay que informar las facturas al servicio, o en cuanto se hace el servicio, la boleta sale informada al servicio; él no emitía regularmente las facturas en Carsal; era César González, hasta que llegó el tema de la Cervecería, pues la primera facturación que hizo él fue con Cervecerías Chile; la señora Victoria Latanzi, administradora de Carsal en ese minuto, le solicitó emitir las facturas a Claudia Saldivia.

Tribunal, la empresa Valle Patagonia era distribuidora y comercial de los productos Pepsico; le vendía a Claudia Saldivia estos productos.

Este deponente, que trabajó en la empresa Carsal y Valle Patagonia vinculada a los acusados, durante gran parte del período comprendido en la acusación fiscal y particular, apoyado por las fotografías que se exhibieron, si bien entregó un panorama bastante pormenorizado de las actividades realizadas bajo el amparo principal del giro, confirmando los dichos de los acusados en orden al gran movimiento que existía en las bodegas, los proveedores que existían, el desorden con que se encontró a su llegada a la empresa, la existencia de mercaderías vencidas, la desprolijidad en el cobro de las facturas, el manejo desprolijo de los asientos contables, etc, lo cierto es que todo ese desorden, no entregó en lo absoluto certezas respecto al punto neurálgico de las teorías de los defensores, resultando poco comprensible que se intente desvirtuar una



imputación penal, con el desorden administrativo y contable que existía. Adicionalmente, este testigo, en lo que realmente resultaba relevante que aclarara, dio respuestas que incluso ratificaron la tesis de los acusadores, al señalar que no sabe si Carsal pagó el IVA por los productos que traspasó a Claudia Saldivia; no sabe si Claudia Saldivia adquirió un crédito IVA por haber comprado esos productos; y aseguró cada transporte cobra diferente atendido “el sin fin” de ítems que tienen de acuerdo al servicio que presta, reiterando que todos los fletes tienen un costo diferente, en circunstancias que del simple análisis de gran parte de las facturas, estas tenían un valor idéntico.

Finalmente, se presentó al testigo **Damián Alexis Guerrero Vera**, encargado de jefe de carnicería, quien declaró que comenzó a trabajar con Claudia Saldivia en noviembre de 2014, como encargado de jefe de local San José de Lautaro y luego fue enviado a la bodega de El Salto Chico, en la recepción de la mercadería, donde trabajó durante 4 años como encargado de bodega y recepción de mercadería; trabajó en Lautaro hasta febrero o marzo de 2016, y después se fue a El Salto Chico; estaba encargado de recepcionar la mercadería que llegaba, su trabajo era recibir la mercadería óptimamente y que todo lo que llegase, pasarlo a un inventario Excel; recibía un bono por tener toda la mercadería íntegra en esa bodega, para después ser despachada a los locales San José, que eran tres, se hacían guías de despacho y se enviaban; recibían 7 u 8 camiones diarios, tanto regionales como de afuera, de lunes a sábado; a veces trabajaban los domingos, él recibía la mercadería y guardaba en la bodega, se ingresaba a los inventarios y luego se despachaba a los locales con guías de despacho, domingo era una vez a las quinientas; en la semana se reciben unos 15 camiones regionales, incluyendo CCU, Coca-Cola, Colún, y de fuera de la región, era 1 o 2 camiones semanales; los camiones fuera de la región uno era de la empresa AGM, que era harina de la Unión, otro de quesos de Osorno, y camiones que venían cargados con mercadería, y que sólo venía el transportista, lleno de mercadería, que traía las facturas adentro, y él tenía que descargarla y ver las facturas, que eran de La Caserita, Lo Valledor, Acuenta, venía confort, perecibles, como latas, atún, fruta duradera, como palta, tomate, la compraban verde y llegaba madura, las de Lo Valledor y La Caserita venían de Santiago.



Ante las preguntas del Ministerio Público. Sabe con certeza que recibía 6 o 7 camiones diarios; de Santiago venían uno o dos camiones a la semana; de Santiago venía uno a la semana; eso lo sabe desde febrero del año 2016 hasta diciembre de 2016; eran camiones distintos, el de AGM era una rampla completa, y el de Osorno distinto, el de Santiago era distinto, lo llenaban y venían para acá; el que venía de Santiago, el chofer no le entregaba una factura por el flete; no le pagó alguna vez al chofer la factura por los fletes; no sabe cuánto costaba el flete; él estaba en El Salto Chico; en ese lugar también llegaban camiones para Valle Patagonia, esos camiones traían papas fritas; él sólo recibía productos para San José, al principio recibieron papas fritas, fue solo para probar, pero no funcionó; esa empresa que trae snack se llamaba Pepsico; siempre se han recibido camiones; no recuerda haber dejado recibido facturas al interior de camiones; las facturas que venían dentro de los camiones se las entregaba a la persona encargada de ingresar el inventario, y esa persona la llevaba a contabilidad; en esas facturas estaba establecida que las compras eran de Santiago, eran identificables respecto de otras facturas; las mercaderías debían venir con guías de despacho, pero éstas venían con la factura dentro, ya lista; no podía recibir un camión que no viniera con factura.

Respecto del Querellante indica que de los camiones que venían de Santiago, venían uno a la semana, el transportista no era el mismo, pero era el mismo camión azul, no maneja cuál era la empresa de transportes, pues su función era recepcionar la mercadería conforme a la factura; en diciembre de 2016 estaba en la bodega de El Salto Chico; recuerda que ese mes tuvo que contratar gente para descargar mercaderías, llegaron hartos camiones, con harta mercadería.

Relata que el comenzó a trabajar en noviembre de 2014 en Lautaro, y se le dio la oportunidad de trabajar en Lautaro, de recepcionista, desde que se construyó la bodega; está físicamente en la bodega desde febrero de 2016; la razón social de Almacenes San José es Claudia Saldivia Vidal; el camión azul era el mismo, era posible que viniera una vez a la semana.



Este último testigo, que por su función en la empresa Almacenes San José, estaba en una situación privilegiada para poder acreditar los dichos de los acusados, en orden a que las operaciones de transporte contenidas en las facturas cuestionadas se habían realizado efectivamente, aportó antecedentes que en estricto rigor aportillaron dichas alegaciones, pues al detallar sus labores y dar cuenta de los camiones que diariamente descargaba en las bodegas ubicadas en El Salto Chico, indicó que las facturas que daban cuenta de la mercadería venían dentro de los camiones y se las entregaba a la persona encargada de ingresar el inventario, quien llevaba a contabilidad, resultando por tanto inexplicable que los acusados no las hayan presentado para justificar la existencia de las operaciones de transporte de las facturas cuestionadas.

Y además, este deponente aseguró que el camión que traía las mercaderías desde Santiago, era siempre el mismo, resultando contrario a las máximas de la experiencia o reglas de la lógica, que las facturas estuvieran entonces relacionadas con empresas de transporte diferentes.

Finalmente, los Defensores llamaron a rendir su informe, al perito contador auditor, **Jaime Pedro González Tobar**, quien expuso que se le encomendó hacer una metapericia o pericia del método; en fecha 22 de julio de 2019, el SII presentó una querrela criminal por delito tributario en contra de Claudia Saldivia Vidal y José Ovando Pérez; el 10 de febrero de 2023, se comunica cierre y se acusa a los acusados por parte del Ministerio Público y el SII; según el Ministerio Público se realizan las prestaciones de transportes por personas distintas a los querrellados, y el SII señala que los servicios no fueron realizados; durante el proceso investigativo la Policía de Investigaciones le solicitó a Carmen Opazo Valdés, contadora auditora, que realice un informe pericial, que fue el 9/2020, y fue preparado en función de la carpeta investigativa y documentos proporcionados por el SII; posteriormente en la audiencia de reapertura, presentaron el informe 9/2023, que la Defensa de los querrellados estimó insuficiente, por lo que se solicitó un peritaje propio con el fin de contrastar el peritaje original, por lo cual él fue contactado; el informe 09/2023, los documentos que le dieron origen no formaron parte de la carpeta



investigativa, lo que fue una situación extraña, pues no pudo correlacionar el origen de ese informe; por tanto solicitó a los abogados de los querellados, información de los audios y pudo relacionar lo que se estaba tratando de hacer, que era hacer un informe con nuevos antecedentes que no habían sido incorporados en el primer peritaje, que son un fallo del tribunal tributario aduanero de Aysén y de un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, que al contrastarlos con la información del 09/2023, si bien hacen una mención, sólo consideran los antecedentes negativos, en circunstancias que el Juez de Garantía había solicitado que se consideraran también los positivos, como lo era el fallo que los había solicitado en las dos instancias; su análisis se centró en el informe 09/2020 el que fue preparado por la perita ya señalada, y contiene información contable de la causa y antecedentes de la custodia del Ministerio Público; el informe que preparó es revisar al metodología de la base de las conclusiones de los documentos contables que se encuentran ahí, revisó los antecedentes contables, las acusaciones del Ministerio Público y SII, los audios a la parte querellada y revisó los fallos del tribunal aduanero de Aysén, la citación 22, la circular 93, que es emitida por el Director Nacional del SII, en diciembre de 2001, el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, y lo más importante, hacer una visita al lugar donde ocurrieron los hechos; estuvo en los locales, hizo una inspección, vio que el local tenía compras, muchas ventas, visitó 3 locales, fue a la bodega, que es un gran centro de distribución que está en el sector de El Salto Chico, donde pudo verificar en terreno que había camiones, un procedimiento de recepción de mercaderías, acumulación de muchos productos para el consumo, un frigorífico; además solicitó la documentación de custodia de la Fiscalía, para cerciorarse cuál era la cadena de custodia y contrastara con la información que tenía; además fue al Tribunal Tributario Aduanero, para certificar todo lo que se señaló en la sentencia; pudo verificar que la perito efectuó en su informe un objetivo, una introducción donde hizo una conceptualización de algunos aspectos legales, señalando la base de la revisión, que fueron tres archivadores que están en la cadena de custodia del Ministerio Público, ocho proveedores y 63 facturas cuestionadas; las conclusiones a las que arribó la peritada, fueron que todas las facturas son falsas,



pero ella dice irregulares, por el período 2016 a 208; los aspectos críticos que pudo verificar respecto a la metodología del trabajo, es que hay un objetivo que es bastante amplio, dice que es una pericia judicial, pero cuando los auditores hacen un encargo deben tener claro el objetivo, y para el caso en cuestión, al no tener un objetivo claro, cualquier metodología puede llevar a conclusiones sesgadas; además, la perita en su informe señaló al principio, sin hacer ningún análisis, que todas las facturas son irregulares, lo que llama la atención, pues eso es parte de una conclusión, pues lo único que conocía la perito eran las querellas; por lo que la pericia podrá estar sesgada; hay una falta de cumplimiento de la perita de lo que el Director Nacional de SII señala en la circular 93, pues ella dice lo mismo que señala el SII ante el Tribunal Aduanero, que son presunciones, y la Circular 93 hala que las presunciones no son suficientes, hay que demostrar hechos concretos para alegar facturas falsas; notó que hay una cierta tendencia en el informe hacia un objetivo que no está claro, dando como ejemplo que hay un proveedor, Eric Contreras Tapia, que está en el informe, pero la perita dice que son facturas ideológicas, pues no se pudo verificar la prestación, pero sí se verificaron las prestaciones, por lo que el Ministerio Público decidió no perseverar; por eso vio que faltan antecedentes para sustentar las alegaciones que son facturas falsas porque no se pudo probar lo más importante, que es la prestación del servicio; en concreto vio la búsqueda de un patrón de registro de facturas falsas, lo que le pareció bastante extraño, en el contexto de una investigación penal, donde no se pudo conseguir ninguna evidencia que los procesos o prestaciones no hayan sido realizadas o los servicios no hayan sido prestados; la hipótesis del Ministerio Público es que las prestaciones fueron todas realizadas por terceros, pero que no corresponden a la empresa singularizada; él al revisar la carpeta no pudo encontrar documentos, comunicaciones o testimonios directos que dieran cuenta que las prestaciones no se hubieran realizado; asimismo, ningún concierto de voluntades para delinquir, en ese sentido, está el tema del incumplimiento de la norma del 93, que es la que regula a todos los funcionarios del SII, en cuanto a que las aseveraciones que digan respecto a facturas falsas, tienen que estar apoyadas en documentación fuente, lo que es muy importante; verificó que las presunciones que se alegaron



ante el Tribunal Tributario Aduanero son las mismas que presentó la perita en el informe, por lo que carece de fundamento para sostener que la documentación que se está alegando sea falsa, porque no se pudo documentar en ninguna parte que no se realizaron.

Que a las consultas del Ministerio Público el declarante dijo que el objetivo del informe era pericia judicial y las conclusiones eran todas las facturas irregulares; al revisar el informe y no verificar que las prestaciones se hayan realizado, no puede señalar que haya perjuicio fiscal; la perito sólo determinó el perjuicio por el IVA; el objetivo de la pericia 9/2020 no era determinar si los servicios que daban cuenta las facturas se prestaron o no; era un pericia judicial, en el inicio del informe, en la primera página se señala; 332 CPP “se solicita realizar pericia contable”; donde dice realizar pericia contable, es pericia judicial; revisó todo lo relacionado con el informe; no reviso los libros de compra y venta de Claudia Saldivia de 2016 a 2018; no tiene información de si los fletes estaban relacionados con las compras; entre diciembre de 2016 y marzo de 2018 fueron 73 facturas cuestionadas, de ocho proveedores: Asistan Group, Group Lavín, Sustrato Agrícola Sustagro, Catalán y Salgado Transportes, La Minga, Asimec, el señor Contreras Tapia y Distribuidora Carsal; no sabe si los IVA de esas facturas están pagados, pues no puede revisar la conducta de los acreedores, pues la pericia estaba avocada al transporte; hay antecedentes que los querellados pagaron esas facturas, fue del orden de los a 37 millones, pagados mediante depósitos y directo a los contratistas, en efectivo, según declaración de Claudia Saldivia, quien señaló que hay pagos depositados a la cuenta corriente de Luz Matilde Reyes Celda, y la diferencia a los transportistas; no hay registro de esos pagos; Carlos Muñoz era el encargado de los fletes, no aparece en la contabilidad; no hay registro de pago a las empresas que emitieron las facturas; él vio en una hoja Excel los créditos de los 16 meses por 3 años, y los contrastó de los IVA y débitos, y puede señalar que hay diferenciales que dan cuenta que siempre hubo IVAS débitos superior a los IVA crédito; en el mes de diciembre de 2016 hay una factura de Sustagro, bruto, de 17.850.000; el comportamiento de las ventas es en ascenso, pero lento, siempre fueron creciendo; desde abril de 2017 a marzo de 2018, hay 4 o 5



facturas por mes; en el año 2017, de enero a marzo no hay contabilización de ninguna de factura de transporte; los pagos a Reyes Cerda, vio el reporte del banco BCI, eran transferencias; no podría decir si eran correlativas; las contabilización total de las facturas, de diciembre de 2016, a marzo de 2018, el valor en fletes, por el IVA, fueron como 70 millones; en cuanto al IVA de la mercadería que se compró en Santiago no hay ninguna información; tampoco encontró información del pago del IVA de las mercaderías que se compraron en Santiago.

En torno a las respuestas del Querellante señala que trabaja desde el año 2001; no lleva contabilidad, no es experto tributario, es perito judicial en materias de contabilidad; el principio de objetividad contable implica reflejar los derechos y obligaciones que un evento económico ocasiona; la documentación debe estar sustentada en las operaciones; los servicios fueron prestados por las empresas que aparecen singularizadas en las facturas; Carlos Muñoz no está en la contabilidad; respecto de los fallos del Tribunal Tributario, no concluyó sobre la efectividad de las operaciones, sólo dijo que la citación estaba mal fundada, tenía errores de vicio en el acto administrativo; el Tribunal Tributario dejó sin efecto las liquidaciones realizadas por el SII, basadas en operaciones que no fueron bien sustentadas; entiende que la empresa que visitó en El Salto Chico pertenece a los querellados; fue en noviembre de 2023; no sabe de quién es el domicilio; a él lo contrataron en octubre del año pasado, y lo primero que hizo fue verificar que todo existe, lo que pudo comprobar, se refiere a infraestructura logística, distribución, ventas; no hay ningún antecedente que los servicios que dan cuenta las facturas no se hayan realizado, en tanto que el SII dice que no se realizaron; no dice que sí se realizaron, sino que no hay evidencia que no se realizaron;

Como concluía se cuestiona por el SII que no fueron realizados, quien dice que los transportes si se realizaron, no hay evidencia que no se realizaron.

El Informe expuesto por este perito no tuvo a la postre la entidad, contundencia, ni rigurosidad suficientes para poder restar validez a la pericia contable N°9/2023 elaborada por la perito Carmen Opazo Valdés, pues más allá



de hacer una extensa relación del contexto en virtud del cual comenzó la investigación, denuncia y posterior acusación, en lo que respecta a la metodología, objeto, información recabada y conclusiones del informe que examinó e intentó desvirtuar, sus conclusiones fueron muy febles, acotadas y carentes de la contundencia necesarias para siquiera poner en entredicho las aseveraciones de la profesional presentada por los acusadores, criticando por ejemplo la amplitud del objeto de la pericia examinada, en circunstancias que este Tribunal la apreció muy concreta; reprochando que la profesional haya señalado al principio de su informe que todas las facturas eran irregulares sin hacer un mayor análisis, pero de la exposición que hizo doña Carmen Opazo Valdés, no fue posible desprender aquello, sino que fue analizando los antecedentes que recabó y arribando a conclusiones en base a ese análisis; o criticando que no se cumplió lo que el Director Nacional de SII señala en la circular 93, al haber utilizado presunciones, pero este tipo de razonamiento, se alcanzó en base a pruebas objetivas que fueron allegadas en la investigación; y finalmente, al concluir que faltan antecedentes para sustentar las alegaciones que son facturas falsas porque no se pudo probar lo más importante, que los servicios no hayan sido prestados, en circunstancias que durante la investigación, tal cual se acreditó en el juicio, se allegaron antecedentes diversos para acreditar que los servicios que daban cuenta las facturas no se realizaron, y no solo eso, los acusados no entregaron antecedentes que permitieran tener por probado que tales servicios sí se había efectuado.

Que se acreditó con la prueba documental (certificado de matrimonio) la celebración del acto jurídico entre Carlos Andrés Muñoz Vásquez con Luz Matilde Reyes Cerda el día 5 de diciembre de 2003, con lo cual la tesis propuesta por las defensas quedó acreditada en cuanto entre ellos existía este vínculo estrecho, con lo cual podía entenderse las transferencias de dinero, pero que en caso alguno permite sostener que Ovando Pérez haya actuado de buena fe al momento de pagar facturas de terceros en una cuenta de la cual no tenía mayores antecedentes.



Por otra parte respecto del documento signado como reconocimiento de deuda contribuye a darle sustento a los dichos del acusado Ovando Pérez pero que en caso alguno, puede concluirse que dicho documento genera una duda razonable respecto de los hechos.

En este mismo orden de ideas, se encuentra el documento signado como citación del servicio de Impuestos internos de fecha 5 de septiembre de 2018, en cuanto se aportan los antecedentes e individualización de la acusada Saldivia Vidal como contribuyente siendo fiscalizada por con fecha 12 de junio de 2018, lo que es concordante con la prueba de cargo, que en dicha citación se los proveedores Group SPA; La Minga SPA; Group Ingenierías Lavín SPA; Sustratos Agrícolas SUSTAGRO Compañía Limitada; Servicios Integrales ASIMEC; Sociedad de Transportes Catalán Salgado Limitada; Distribuidora Comercial Carsal Limitada aportando como información relevante el número de factura, la fecha los montos, la glosa lo cual es coincidente con lo razonado precedentemente.

En torno al documento signado como certificado de deuda de la Tesorería General de la Republica sobre la acusada Saldivia Vidal, en la cual se consigna que no registra deuda alguna, no representa necesariamente que los actos que configuran el tipo penal no se hayan realizado ya que dicha institución tiene por objeto, entre una de sus funciones recaudar y custodiar los recursos del Tesoro Público, por lo cual eventualmente el cobro de los impuestos no se haya realizado a la hora de emitir dicho documento.

Que si bien la defensa aporta como antecedente relevante la copia de las cartolas BCI de la cuenta corriente 64068439 de la titular Claudia Andrea Saldivia Vidal desde enero de 2016 a marzo de 2018, en donde se consignan “pago fletes”, “abonos fletes” o “abono facturas” a la cuenta corriente de Luz Matilde Reyes Cerda por distintos montos, ello corrobora en parte de lo expuesto por los acusados, pero en caso alguno puede permitir concluir que los servicios de fletes se hayan prestado ya que no existe otra fuente de información que los propios acusados no contando este Tribunal con las declaraciones de los



testigos Carlos Muñoz Vásquez ni Luz Reyes Cerda, careciendo de corroboración la información mencionada.

DECIMO PRIMERO: Calificación Jurídica. Que conforme se razonara al deliberar, analizada la prueba descrita en el considerando noveno, este Tribunal califica jurídicamente los hechos asentados en el razonamiento octavo de esta sentencia, como constitutivos del delito de realización maliciosa de acciones tendientes a aumentar el verdadero monto del crédito fiscal o imputaciones a éste en impuesto de ventas y servicios e impuesto a la renta, previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso primero, segundo y cuarto del Código Tributario; al haberse acreditado que Claudia Andrea Saldivia Vidal y José Manuel Ovando, en su calidad de persona natural y contribuyente de primera categoría y el segundo de los nombrados como representante legal y administrador, realizaron maniobras que llevaron al registro en los Libros de Compra y Venta, y la declaración con los respectivos formularios N°29, de un total de 65 facturas falsas, correspondientes a siete proveedores, quienes no realizaron las operaciones que en éstas se consignan, aumentando de esta forma los créditos fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer dicha sociedad, en relación a las cantidades que esta debía enterar en arcas fiscales, y provocando con ello un perjuicio al erario público que asciende a la suma total de \$46.615.117. por concepto de Impuesto al Valor Agregado y en caso del impuesto a la renta es un monto de \$49.870.611.

En lo que respecta al delito consagrado en el **artículo 97 inciso primero del Código Tributario**, el cual reza “las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del



cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo.”

Debemos hacer presente que las conductas ejecutadas por los acusados se subsumen en el verbo rector de incorporar declaraciones maliciosamente falsas, toda vez que las facturas que aportaron en los periodos de declaración del impuesto a la renta 2016 y 2017 son falsas lo que permitió disminuir la base imponible, aumentando los costos de manera dolosa con lo cual pagó menos impuesto al que realmente les correspondía.

Respecto del delito tipificado en el mencionado artículo en su inciso segundo concurren todos los elementos, esto es, la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos:

a.- Que el sujeto activo sea un contribuyente afecto al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo. Debiendo para ello tenerse presente, lo dispuesto en el artículo 3° del DL 825 de 1974 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que resulta ser más específico que el artículo 8 N°5 del Código Tributario. En este sentido el referido artículo 3° dispone que “son contribuyentes, para los efectos de esta ley, las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que realicen ventas, que presten servicios o efectúen cualquier otra operación gravada con los impuestos establecidos en ella.”

A este respecto y como ya se razonara latamente, los acusados Saldivia Vidal y Ovando Pérez tenían la calidad de contribuyentes y afecto al Impuesto a las Ventas y Servicios.

b.- Realización de cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer. Que en este aspecto, ha de estarse a los fundamentos señalados en el considerando respectivo relativo a las actuaciones que se realizaron por parte de los acusados, a objeto de obtener el registro de facturas relativas a operaciones inexistentes, fuera porque ello lo llevó a efecto directamente Ovando Pérez, haciendo las veces de administrador, al entregar facturas de servicios relativas a



operaciones no realizadas (fletes), para que fueran registradas en el libro de compras y ventas de la contribuyente Claudia Saldivia Vidal, en el período que se tuvo por establecido, o en razón de que, Claudia Saldivia Vidal, ejecutó actos que implicaron delegar la gestión de su patrimonio, tanto en su pareja José Ovando Pérez, como en las personas que le llevaban su contabilidad para actuaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, sin ejercer control alguno, o con su aceptación tácita al aceptar que otra empresa de la cual ella es socia en un 70% proceda a emitir facturas en las cuales se aprovechó del crédito fiscal del IVA, todo lo cual permitió el registro de las facturas correspondientes a operaciones no realizadas, de las cuales se ha dado cuenta o bien de aquellas de las cuales no poseía derecho alguno para el crédito fiscal.

Se debe además, tener presente lo dispuesto en el artículo 23 del DL N°825 de la Ley de IVA, el cual ubicado en el Título “Del Crédito Fiscal, dispone “Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes: 1°.- Dicho crédito será equivalente al impuesto de este Título recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o, en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo período. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente.”, más en el numeral 5° del referido artículo se señala “No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquéllas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto”, disponiéndose a continuación que ello no se aplicará, para el caso de haberse pagado la factura con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados



contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio, cuyo no fue el caso.

Además, y completando la referencia a las normas que han de considerarse en el examen del presente caso, resulta útil tener en cuenta lo establecido en la Circular N°93, del Director del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 19 de diciembre del 2001, que se denomina “Actualiza Instrucciones Sobre Procedimientos que deben Observarse en Caso de Detectarse Documentos que No Dan Derecho a Crédito Fiscal”. Dicha Circular se refiere a lo dispuesto en el artículo 23 N° 1 y 5 del DL 825, ya citado, y al referirse a las causales de rechazo del crédito fiscal señala: “Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del No. 5, del artículo 23 del D.L. N°825, los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado pierden el derecho al uso del crédito fiscal respecto a los impuestos recargados en: 1) Facturas no fidedignas; 2) Facturas falsas; 3) Facturas que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios, y 4) Facturas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes del I.V.A.” Para, especificar qué se ha de entender por tales facturas y que se reproducirá, únicamente en sus primeros numerales por no ser lo demás, pertinente al caso: “1.- Se entiende por "facturas no fidedignas" aquellas que, como su nombre lo indica, no son dignas de fe, esto es, que contienen irregularidades materiales que hacen presumir con fundamento que no se ajustan a la verdad (...), 2.- Se entiende por falsa una factura que falte a la verdad o realidad de los datos contenidos en ella. La falsedad de una factura puede ser material, (...) o ideológica, (...) 3.- No cumplir con los requisitos legales o reglamentarios, significa omitir aquellos que se encuentran establecidos en los Artículos 54 del DL No. 825 y 69 del Reglamento contenido en el DS de Hacienda No. 55, de 1977, y otros establecidos o que establezca esta Dirección en uso de sus facultades legales...”

Es por lo anteriormente expuesto que, el término “facturas falsas” utilizado en el artículo 23 del DL en comento, ha de entenderse en forma amplia, incluyéndose al respecto que la falsedad del documento puede ser material, esto es, que en él se hayan adulterado los elementos físicos que conforman la factura;



o puede ser ideológica, cuando la materialidad del documento no necesariamente está adulterada, pero las operaciones que en ella se consignan son mentirosas o inexistentes, siendo esto último lo que se tuvo por justificado respecto de todas las facturas. Cabe por lo demás señalar, que la dictación de la referida circular y el contenido interpretativo mencionado, se efectuó en uso de las facultades que la propia ley le otorga al Director del Servicio de Impuestos Internos, en el artículo 6 A N°1 del Código Tributario, relativo a “Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos.”

De este modo, es posible concluir que, legalmente no está permitida la incorporación en los libros de compras y ventas, de facturas que correspondan a operaciones no realizadas, a fin de evitar, precisamente el aumento del verdadero monto de los créditos.

c.- Que en cuanto a que el actuar sea malicioso, los antecedentes colacionados son concordantes con un dolo directo de parte de los agentes en la ejecución de los hechos, toda vez que, del mérito de la prueba rendida y de sus propias declaraciones es posible efectuar un juicio de atribución normativa a su respecto, imputándoles el conocimiento de todos los elementos objetivos analizados precedentemente y su voluntad de realización, desde el primer acto de ejecución de cada uno de los ilícitos.

d.- En relación al uso de los créditos fiscales IVA cuestionados y a la presentación de declaraciones de impuestos.

A este respecto, ha de estarse a lo que se tuvo por justificado conforme los razonamientos del apartado precedente en cuanto a que los formularios 22 y 29 se consignó como costo para el cálculo del impuesto a la renta y como crédito el monto del IVA de las facturas de compras que se estableció correspondieron a operaciones que no fueron realizadas, imputándose al débito que correspondía soportar y pagándose únicamente la diferencia de ello.



Que por otra parte, atendido el hecho de haberse acreditado que el actuar tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos se realizó mensualmente, con el giro y pago de cada uno de los formularios 29 durante el período de diciembre de 2015 a marzo de 2018, se tuvo por justificada la reiteración de delitos, pero ello, sólo en los términos que contempla nuestro Código Tributario, en su artículo 112, que prescribe, en su inciso segundo: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el N°10 del artículo 97 en los demás casos de infracciones a las leyes tributarias, sancionadas con pena corporal, se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de ellas en más de un ejercicio comercial anual”, entendiéndose que a éste respecto, conforme lo señala el académico Alex Van Weezel, en su libro “Delitos Tributarios”, Ed. Jurídica, año 2009, pag. 56, “la noción de “ejercicio comercial” es de carácter contable, constituye una especie de “unidad de fiscalización” y comprende, expresado gráficamente, dos tipos distintos de año calendario, compuestos de doce meses, el que termina el 31 de diciembre y el que termina el 30 de junio, según lo establecido en las normas generales de los incisos 7° y 8° del Código Tributario”. Que así las cosas y sin importar cuál de los conceptos de año calendario referidos se aplique, igualmente, el período que se dio por establecido, configura más de un año calendario, lo que da lugar a la reiteración ya señalada.

Además, quedó justificado, que los ilícitos se presentaron en grado de consumado, pues los agentes cumplieron a cabalidad con cada uno de los elementos del tipo penal en análisis.

DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a la participación. Que conforme el mérito de lo razonado en el considerando noveno, es posible atribuir a los encartados Saldivia Vidal y Ovando Pérez una participación de autores, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, toda vez que de los antecedentes probatorios ya latamente referidos, es posible desprender que, realizaron de manera directa y inmediata cada uno de los elementos de los tipos penales por los cuales se ha condenado, estando en pleno conocimiento de las maniobras



tendientes a aumentar el crédito fiscal, para lo cual ha de tenerse en especial consideración lo siguiente:

1.- El haber consentido en la constitución de los respectivos mandatos de Claudia Saldivia Vidal como persona natural, permitiendo que su pareja José Ovando Pérez pudiese gestionarla, tal y como lo reconoció la prueba testimonial, documental y pericial siendo antecedentes suficientes, no sólo por lo que le fuera referido por ellos en sus comparecencias ante el Servicio de Impuestos Internos, sino también por los dichos de la propia acusada Saldivia Vidal.

Que de este modo y por todo lo anteriormente razonado, se concluyó, fuera de toda duda razonable, que Ovando Pérez dada la calidad de representante legal y mandatario participa en los hechos como ejecutor material de los hechos con la anuencia de Saldivia Vidal.

Que tal como lo dice el académico Alex Van Weezel, en el libro ya antes referido, en su pag. 63 “para la imputación subjetiva del hecho se requieren tanto el “dolo” neutro de los finalistas como la conciencia de la antijuridicidad de la teoría de la culpabilidad, es decir, la cognoscibilidad del hecho como contrario al ordenamiento jurídico en su conjunto”, y en ese sentido es dable concluir, que ambos acusados, no podían menos que representarse, el hecho de ser contrario a la ley el imputar indebidamente un crédito al cual no se tenía derecho.

Es más, el propio autor antes mencionado, señala a continuación “el sistema está construido de tal modo que, si alguien no está en condiciones de acceder al conocimiento y comprensión de tales normas, debe procurarse la asesoría oportuna o bien renunciar a la actividad económica en cuestión”, habiéndose también podido establecer, que los encartados contaron, ya desde los inicios de su establecimiento comercial, con la debida asistencia de un contador, por lo que no cabe la posibilidad de error a este respecto.

DECIMO TERCERO: Respecto de la determinación de la pena. Conforme el debate de los intervinientes según lo dispone el artículo 343 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público ratificó lo indicado en su



acusación en tener como concurrente la circunstancia de irreprochable conducta anterior del artículo 11 N° 6 del Código Penal, respecto de los encartados y para ello incorporó el extracto de filiación y antecedentes de cada uno de ellos.

Además estimó que concurre la reiteración, ya sea por el artículo 112 del Código Tributario o la norma del artículo 351 del CPP, esto es que la penalidad queda graduada en la de presidio mayor en grado mínimo más la multa correspondiente es decir, 5 años y un día más la multa del 100%, del monto de lo defraudado, las accesorias legales y las costas de la causa.

Por su parte el querellante señala que atendido la reiteración de delitos, el aumento de grado del artículo 97 N° 4 inciso 4, presidio mayor en su grado medio, es decir, la pena de 10 años y un día.

Por su parte la defensa de Ovando Pérez, solicita que se le reconozca las atenuantes de los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, luego por aplicación del artículo 68 del citado cuerpo legal, solicita que se aplique una pena de presidio menor en su grado máximo y en atención del artículo 15 bis de la Ley 18.216 se le sustituya la pena corporal por libertad vigilada intensiva para lo cual se aportan un informe social y psicológico.

Finalmente la defensa de Saldivia Vidal solicita que se le reconozca la atenuante muy calificada la atenuante del artículo 11 N° 9 y la del número 6, solicitando la rebaja en dos grados y se le sustituya la pena corporal por la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva aportando el informe psicológico y social.

Por su parte los acusadores dejan a criterio del Tribunal la concesión de la atenuante alegada y la concesión de pena sustitutiva.

DECIMO CUARTO: En cuanto a las modificatorias de responsabilidad. Se alegó, primeramente la circunstancia minorante de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal respecto de los condenados Claudia Andrea Saldivia Vidal y José Manuel Ovando Pérez la que el Tribunal tendrá como concurrente para ambos en mérito de los extractos de filiación y antecedentes incorporados al juicio en los que no se observan



anotaciones prontuariales pretéritas. A ello debemos sumar que se trata de comerciantes que generan empleos en una región; sumado al arraigo local que mantienen siendo padres de 3 hijas en común y que durante su actividad comercial de acuerdo a lo aportado por el querellante no han tenido inconvenientes con el Servicio de Impuestos internos, salvo la presente que origina esta causa

Seguidamente, se invocó por todos los intervinientes y respecto de cada uno de los encartados Saldivia Vidal y Ovando Pérez la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, la que el Tribunal estima como concurrente en razón de la declaración de cada una de los acusados, los que renunciado a su derecho de guardar silencio, depusieron en el juicio como medio defensa y no desconocieron circunstancias que se dieron probadas en el juicio, por nombrar algunas: como la representación legal de Ovando Pérez antes de la confección del mandato otorgado por doña Claudia Saldivia; la forma como se pagaban las facturas; las actuaciones dentro de las facultades que les otorgaba el mandato; el reconocimiento de una persona como era el señor Muñoz y las transferencias de dinero a la señora Reyes Cerda, lo cual da cuenta del actuar completo; el aporte de las facturas a la contabilidad de la empresa, siendo una colaboración que sin lugar a dudas permiten aligerar la prueba del Ministerio Público en este juicio.

DECIMO QUINTO: Individualización de la pena. El escenario de castigo por el que debe sancionarse a los condenados Saldivia Vidal y Ovando Pérez, es el de los delitos reiterados, en grado de consumados, del artículo 97 N°4 inciso primero y segundo del Código Tributario, que llevan la pena de multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo además de la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudador respectivamente; además de lo anterior, debe considerarse el marco especial de la pena, dado por la utilización de facturas falsas, quedando el marco de la pena privativa de libertad en el presidio mayor en su grado mínimo, (inciso cuarto del artículo 97 N° 4 del Código Tributario); en calidad de autores (artículo 15 del



Código Penal); en grado de consumado (artículo 7° inciso primero del Código Penal); reiterado (artículos 112 del Código Tributario y 351 del Código Procesal Penal); y concurriendo dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal (artículo 11 Nos 6 y 9 del Código Penal) y ninguna agravante.

Como se puede observar, de los antecedentes anotados previamente la pena privativa de libertad asignada al delito más grave es de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y 1 día hasta 5 años por el primer grado; y luego, de 5 años y 1 día hasta 10 años, por el segundo) sufre varias modificaciones, primero por el marco regulatorio especial que elimina el grado más bajo (presidio menor en su grado máximo de 3 años y 1 día hasta 5 años) y la sitúa en el de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día hasta 10 años). Seguidamente, producto de la regla de aumento conforme la reiteración de los hechos debe imponerse una mayor, aumentando la pena anterior en uno o dos grados, es decir subirla al presidio mayor en su grado medio si se opta por un grado o hasta presidio mayor en su grado máximo si se decide por dos grados (10 años y 1 día hasta 15 años en el primer caso; o de 15 años y 1 día hasta 20 años, en el segundo), estimando, estos sentenciadores, según lo que se dirá más adelante, el aumento solo en un grado quedando en presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día hasta 15 años) y concurriendo dos minorantes de responsabilidad penal y ninguna agravante, la sala del tribunal valoró conforme lo establece el inciso cuarto del artículo 67 del Código Penal, considerando que es procedente la rebaja en dos grados y así quedar en el rango del presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día hasta 5 años), teniendo especialmente presente que la sanción se estima como adecuada y suficientemente coherente con los principios de proporcionalidad y lesividad que gobiernan la culpabilidad, entendida como medida de la pena en concreto a aplicar.

Se suma a lo anterior, la extensión del mal causado conforme lo dispone el artículo 69 del Código Penal y teniendo especialmente presente a la distinta participación de Saldivia Vidal y Ovando Pérez en los hechos que se sancionan,



apreciando el tribunal un reproche penal distinto para cada uno de ellos, tanto en la pena privativa de libertad como en la pecuniaria.

Respecto de la pena de multa, se considera, además, respecto de ambos encartados lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, decidiendo estos sentenciadores imponer en su mínimo en atención a la entidad y cantidad de las circunstancias atenuantes reconocidas, a que no concurren agravantes y, al mérito de los informes sociales incorporados por sus defensas que dan cuenta de las circunstancias económicas de cada uno de ellos según se expresará en la parte resolutive de la sentencia y que se fundan en sus capacidades económicas.

Finalmente, la forma de pago se regulará en las condiciones que se señalarán en lo resolutive del presente fallo, otorgándose cuotas que faciliten dar cumplimiento a la pena de multa.

Sostenemos que tal como se expresó anteriormente que si bien no se calificaron las atenuantes, es menester hacer presente que se trata de personas que se dedican al comercio, generando empleos para familiar de esta región, con un arraigo local. Asimismo su colaboración en el presente juicio más allá del objetivo que pretendían la información proporcionada por los acusados sirvió para asentar la convicción en este Tribunal de su aporte, todas estas razones nos permiten establecer que la rebaja de dos grados es condigna con los fines de la pena tanto general como especial.

DECIMO SEXTO En cuanto al cumplimiento de las penas y abonos.

Respecto a la aplicación de alguna pena sustitutiva a la pena privativa de libertad, estos jueces estiman que respecto de Saldivia Vidal y Ovando Pérez, no existe necesidad de un cumplimiento efectivo de la condena a imponer, por reunirse los requisitos exigidos por la Ley 18.216, para la aplicación de la pena de libertad vigilada intensiva del artículo 15 bis; a saber,

1.- Efectivamente ambos penados no han sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, lo que se desprende del mérito de su extracto de filiación y antecedente acompañado, que da cuenta que no poseen anotaciones penales anteriores; 2.- La pena corporal que se le impondrá no excederá de cinco



años según como se razonó precedentemente; 3.- Que, atendidos los antecedentes sociales y características de personalidad de los condenados; su conducta anterior y posterior al hecho punible; y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permiten concluir que una intervención individualizada respecto del sentenciado, parece eficaz para su efectiva reinserción social.

Sobre este último punto, respecto de la condenada Saldivia Vidal, el informe pericial psicológico da cuenta de se trata de una persona con un juicio de realidad conservada, sin rasgos psicopatológicos o trastornos de personalidad, con estructura de personalidad normal, reconociendo conceptualmente normas sociales imperantes, figuras de autoridad y límites con los demás. Su comportamiento y vivencias están relacionadas con actividades al área social, familiar, especialmente al cuidado de sus hijas y crianza con una dinámica familiar adecuado al subsistema, siendo preocupada de las necesidades emocionales y económicas de su grupo familiar. Cuenta con un arraigo social, siendo una persona proactiva manteniendo sus capacidades personales y familiares. Lo anterior concuerda con las conclusiones de la profesional social Patricia Guevara Morales quien concluye que la peritada tiene una estructura óptima para la internalización del sistema normativo, en base a su estructura de personalidad siendo su mayor preocupación su familia, presentado arraigo familiar, social y laboral lo que permite contar con redes de apoyo para una planificación sobre su futuro lo cual la motiva generando nuevas proyecciones y expectativas de vida, siendo permeable ante la influencia de un agente de control externo como son las figuras de autoridad, con recursos idóneos para generar un proceso.

En lo tocante al Ovando Pérez, se cuenta con el informe social emitido por la profesional trabajadora social Patricia Guevara Morales, quien en lo conclusivo señala que presenta procesos de socialización, internalización del sistema normativo, preocupación realista sobre su situación judicial, cuenta con el apoyo de su grupo familiar, el acompañamiento de estas personas le permite permanecer en forma útil en la sociedad, permitiendo cumplir con sus



responsabilidades familiares y laborales, estos factores generan que el peritado sea una persona con motivaciones. Se visualiza en el peritado recursos en el ámbito personal, social y laboral, lo que potencia y facilita el desarrollo de sus proyectos personales, permitiéndole un arraigo sociofamiliar y laboral adecuado, el que le entrega el sustento económico para la manutención de su grupo familiar.

En lo concerniente a los patrones de conducta delictivas y hechos que se le imputan, se visualiza una capacidad de autoanálisis respecto a su actual situación judicial, señalando que esta sería la primera vez que se encuentra involucrado en un hecho de estas características, comenta que su grupo familiar no cuenta con antecedentes penales.

Que de acuerdo al análisis del test de agresividad aplicado se puede señalar que Ovando Pérez presenta un manejo adecuado de los impulsos, en lo concerniente a la hostilidad, agresividad física y verbal e ira. Presentando una Planificación de su vida que tiene como base a su familia y trabajo, lo que puede ser realizadas en forma efectiva en el medio libre.

Conforme a los antecedentes sociales y características de personalidad del peritado José Manuel Ovando Pérez, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes de los delitos cometidos, permiten concluir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de la Ley N 18.216, resulta eficaz en su caso específico para su efectiva reinserción social.

En tanto el Informe pericial psiquiátrico y del informe social del acusado Ovando Pérez De acuerdo con la información obtenida en la entrevista realizada a José Manuel Ovando Pérez, comenta que recibió socialización primaria y secundaria donde su núcleo familiar primario y la escuela fueron los que durante su niñez y adolescencia permitieron el desarrollo de sus primeras habilidades intelectuales y sociales, lo que le ha ayudado convertirse en un miembro útil a la sociedad.



En la infancia y adolescencia el entrevistado formó su identidad a través de la interacción con amigos y compañeros y familia, comprendiendo que las personas tienen diferentes formas de desenvolverse en su vida.

Considerando los antecedentes recabados, analizados y expuestos, se concluye que, con relación a la situación social del entrevistado, José Manuel Ovando Pérez, presenta procesos de socialización, internalización del sistema normativo, preocupación realista sobre su situación judicial, cuenta con el apoyo de su grupo familiar, el acompañamiento de estas personas le permite permanecer en forma útil en la sociedad, permitiendo cumplir con sus responsabilidades familiares y laborales, estos factores generan que el peritado sea una persona con motivaciones. Se visualiza en los peritados recursos en el ámbito personal, social y laboral, lo que potencia y facilita el desarrollo de sus proyectos personales, permitiéndole un arraigo socio familiar y laboral adecuado, el que le entrega el sustento económico para la manutención de su grupo familiar.

En relevante a los patrones de conducta delictivas y hechos que se le imputan, se visualiza una capacidad de autoanálisis respecto a su actual situación judicial, señalando que esta sería la primera vez que se encuentra involucrado en un hecho de estas características, comenta que su grupo familiar no cuenta con antecedentes penales. Respecto al análisis del test de agresividad aplicado se puede señalar que este presenta un manejo adecuado de los impulsos, en lo concerniente a la hostilidad, agresividad física y verbal e ira. José Manuel Ovando Pérez, presenta una Planificación de su vida que tiene como base a su familia y trabajo, lo que puede ser realizada en forma efectiva en el medio libre.

De esta manera de los antecedentes aportados por la defensa de los acusados Saldivia Vidal y Ovando Pérez, donde mediante el análisis de una serie de parámetros conductuales y sociales, se acredita que los condenados mantienen una serie de habilidades y conductas que permiten concluir que una pena sustitutiva les permitirá contribuir mejor al proceso de internalización de su conducta transgresora y su proceso de resociabilización.



De otro lado, en cuanto a los fines de prevención especial, se debe considerar la historia vital y características de personalidad de los acusados (comerciantes, padres de familia), los que hacen presumir que esta pena la disuadirá de cometer nuevos delitos ya que tal como lo sostiene la sicóloga en su proyección es poco probable que se repitan los hechos, toda vez que se han activado redes familiares, sumado al hecho que su conducta no presentó ningún conflicto anterior con la justicia antes de estos hechos.

Hacemos presente que tanto Saldivia Vidal como Ovando Pérez no estuvieron privados de libertad por esta causa, ni menos estuvieron sometidos a medidas cautelares de menor intensidad según consta del considerando décimo tercero del auto de apertura, por lo que no existen abonos que considerar.

DECIMO SEPTIMO: Costas. Que atendido el artículo 47 del Código Procesal Penal, se condena en costas a los acusados al haber sido totalmente vencidos en la presente causa.

DECIMO OCTAVO: Prueba desestimada. Que se desestima la prueba documental de informe de recopilación y cuadernos de prueba aportada por el querellante toda vez que los antecedentes citados dan cuenta de la misma información que se encuentra en la declaración del funcionario del SII Vargas Chaura, como también contenida en la prueba documental consistente en las facturas de los proveedores que se mencionan en ellas.

Por su parte se desestiman las sentencias del Tribunal Tributario Aduanero y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique recaídas en la reclamación efectuada por la contribuyente Saldivia Vidal, porque solo da cuenta de un vicio que recae en un procedimiento administrativo que sin lugar a dudas está relacionado con esta causa pero no es el sustento o fundamentación de los hechos, ya que lo que se verifica por estos sentenciadores es si la conducta descrita en la acusación se subsume en la figura penal que sostuvieron los persecutores penales.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 11 numerales 6, y 9, 14, 15, 18, 21, 25, 29, 30, 50, 68, 70 y demás pertinentes del



Código Penal; lo dispuesto en los artículos 8 N°5, 97 N°4 incisos 1, 2 y 4, 100, 111 y 112 del Código Tributario; lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y demás pertinentes del Decreto Ley N°825, Ley sobre impuestos a las ventas y servicios; artículo 1° letras b) y d), con relación a los artículos 7, 8, 15 bis y demás pertinentes de la Ley 18.216; y artículos 1, 45, 47, 51, 52, 53, 295 y siguientes, 339, 340, 341, 342, 348, 468 y 351 y demás atinentes del Código Procesal Penal se declara:

I.- Que se CONDENA a **CLAUDIA ANDREA SALDIVIA VIDAL**, ya individualizada a sufrir la pena única de **CINCO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo, multa de \$46.615.117 (cuarenta y seis millones seiscientos quince mil cien diecisiete pesos) por el 100% del monto de lo defraudado por concepto de Impuesto de valor agregado y \$24.935.305 (veinticuatro millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cinco pesos por el 50% del monto defraudado por impuesto a la renta y la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por la participación que le ha correspondido en calidad de autora de los delitos reiterados de realización maliciosa de acciones tendientes a aumentar el verdadero monto del crédito fiscal o imputaciones a éste en impuesto de ventas y servicios y otros, descritos y sancionados en el artículo 97 N°4 inciso primero, segundo y cuarto del Código Tributario, todos en grado consumado, cometidos en esta jurisdicción, entre el mes de diciembre de 2015 y año 2018.

II.- Que se CONDENA a **JOSE MANUEL OVANDO PÉREZ**, a sufrir la pena única de **CINCO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo, multa de \$46.615.117 (cuarenta y seis millones seiscientos quince mil cien diecisiete pesos) por el 100% del monto de lo defraudado por concepto de Impuesto de valor agregado y \$24.935.305 (veinticuatro millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cinco pesos por el 50% del monto defraudado por impuesto a la Renta y la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por la participación que le ha correspondido en calidad de



autor de los delitos reiterados de realización maliciosa de acciones tendientes a aumentar el verdadero monto del crédito fiscal o imputaciones a éste en impuesto de ventas y servicios y otros, descritos y sancionados en el artículo 97 N°4 inciso primero, segundo y cuarto del Código Tributario, todos en grado consumado, cometidos en esta jurisdicción, entre el mes de diciembre de 2015 y año 2018.

III.- Que, se autoriza ambos condenados a pagar las multas impuestas en doce (12) parcialidades, iguales, mensuales y sucesivas, debiendo comenzar el primer pago los cinco últimos días de cada mes, contados desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. El no pago de una sola de las parcialidades hará exigible el total de la multa impuesta, y, para el evento de que no pagaren, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Código Penal.

IV.- Que, cumpliendo los condenados **CLAUDIA ANDREA SALDIVIA VIDAL** y **JOSE MANUEL OVANDO PÉREZ** con los requisitos consagrados en el artículo 15 bis de la ley 18.216 y estimando el Tribunal que le es más beneficioso, se les sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta a cada uno, por la pena de LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA, y para lo cual quedarán sometidos por un plazo de CINCO AÑOS, a la intervención por parte del correspondiente Delegado de Gendarmería en la forma que se señala en el artículo 16 de la Ley 18.216, debiendo además acatar las prescripciones del artículo 17 y la del artículo 17 ter, letra c) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que determine el juez, durante un lapso máximo de ocho horas diarias, las que deberán ser continuas, desde las 22 horas a las 06:00 horas.

Los sentenciados deberán presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, correspondiente a sus respectivos domicilios, dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el respectivo condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad



impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En estos casos, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva.

VI.- Que se condena a los acusados al pago de las costas de la causa.

Una vez firme o ejecutoriada la presente sentencia, remítase, en oportunidad copia autorizada, al Juzgado de Garantía competente para su cumplimiento y ejecución.

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216 se dispone que deba ser omitido en el extracto de filiación y antecedentes de los sentenciados la presente condena. Oficiese una vez ejecutoriada la presente.

Devuélvase a los intervinientes los documentos incorporados al juicio, según corresponda.

RUC N°190035167-9.

RIT N°22-2024.

Pronunciada por la Sala Única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal esta ciudad integrada por los jueces, don Pablo Freire Gavilán, quien presidió la audiencia, doña Mónica Coloma Pulgar y don Patricio Zúñiga Valenzuela. Firma digitalmente la presente sentencia el Magistrado Zúñiga Valenzuela.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YCXWXPZNSS